



1. MUJERES, HOMBRES Y LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS: UN ANÁLISIS DE DIMENSIONES Y POLÍTICAS

Alison Vásconez

En este capítulo se propone dar una mirada, a partir de algunas de las dimensiones más importantes del bienestar desde el punto de vista económico, la situación de las mujeres en la región latinoamericana en forma integrada. En primera instancia se describen las principales tendencias de la política económica y social de las últimas tres décadas en la región, y en este contexto se analiza el crecimiento económico y su relación con la feminización laboral, la desigualdad y la pobreza, resaltando dimensiones en que se manifiestan las mayores diferencias de género: trabajo, ingresos, empleo, propiedad, entre otros. Partiendo de este breve recuento resumido de estas dimensiones básicas se propone un análisis de los aspectos más relevantes de debate en relación a los regímenes económicos y sociales en los que las mujeres y los hombres latinoamericanos se sitúan.

1.1 ENFOQUES DE LA ECONOMÍA Y ESTRATEGIAS DE ACUMULACIÓN

Con diferentes ritmos, actores y contradicciones, la región Latinoamericana asistió, durante 30 años, a la finalización de algunos intentos de industrialización endógena (básicamente guiada por el estado), a la recepción indiscriminada de flujos financieros internacionales que detonaron una crisis de endeudamiento y dependencia externa, al ingreso de lleno al esquema neoliberal aperturista homogenizante y a una aparente reconstitución de estilos de desarrollo más propios y diversos en la mayoría de países, en épocas recientes.

En la base de esta heterogeneidad en ritmos y niveles de alcance de lo que en la teoría de la modernización se denominarían “etapas del desarrollo” se encuentran, por un lado, economías de rápida industrialización,

con reformas y políticas claramente proteccionistas en línea con la estrategia ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones), aunque con niveles de institucionalización diversos, como Chile, Argentina, Brasil, México y Uruguay en primera instancia y luego Perú y en alguna medida Colombia²¹. El desarrollo industrial protegido por el estado lleva también procesos de integración vertical y horizontal²², la organización empresarial se complejiza, hay más capitales y la productividad aumenta en especial en la manufactura. Esto provoca un gran salto del producto por persona económicamente activa en especial en los países de industrialización rápida y Venezuela. El otro grupo de países, con procesos más tardíos de industrialización está conformado por naciones centroamericanas (en especial Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador), Paraguay, Bolivia y Ecuador, con mercados pequeños, economías abiertas y en el caso de Centroamérica, alta vinculación con la economía y la moneda norteamericanas, con lo cual en estas economías también se presentan los primeros momentos de integración comercial.

Si bien muchos de estos desarrollos industriales fueron generados por avances (y adaptaciones) de tecnología (mayoritariamente sectores estratégicos tales como energía y minería, fomentado en algunos casos por gobiernos militares y nacionalistas), muchos autores y autoras atribuyen a los rápidos cambios tecnológicos algunos desajustes económicos y sociales en especial en países de mayor industrialización: la división de empresas y unidades económicas entre las muy grandes orientadas hacia fuera y con alto capital externo, las medianas y en especial pequeñas que se conforman en torno a las grandes pero son excluidas en especial por el ingreso de transnacionales; y un amplio y persistente sector “informal” en donde entra la mano de obra nueva que sale de sectores no apoyados por los estados, zonas rurales o nueva población en edad de trabajar, y que la economía más dinámica no puede absorber (casos extremos son Perú, México, Bolivia, Venezuela y Ecuador).

En esta dinámica el capital privado externo juega un rol importante, a través de la instalación de empresas extranjeras que tienden a desplazar a las nacionales, en especial en bienes de consumo duradero,

²¹ En algunos de estos países se atribuía casi la mitad del producto industrial de los años 60 a la sustitución de importaciones (Thorp, 2005).

²² Integración vertical hace referencia a una forma de propiedad que incluye varias etapas de una cadena productiva. La integración vertical es la propiedad de varias empresas subsidiarias que venden un producto similar a distintos mercados.

con tecnología propia. En este contexto, llevado al extremo, el principio proteccionista para la sustitución de importaciones afecta al proceso productivo nacional, con lo cual las empresas nacionales no consiguen adoptar o generar tecnología apropiada, y se especializan más bien en la fabricación de “partes”, más que a la organización del proceso completo de producción (contrariamente a los países del sudeste asiático). De este modo queda la producción final para las empresas extranjeras integradas verticalmente con las nacionales en los procesos anteriores de la cadena productiva (Thorp, 2009). Es decir, se estimula la iniciativa privada y la inversión de capitales extranjeros para la producción final, pero se imponen barreras a la entrada de los bienes importados.

Más aún, en los casos en que los países de la región consiguen insertarse en la economía internacional con productos de mayor valor agregado, también las grandes economías protegen sus productos, con lo cual tampoco se consigue una inserción competitiva. Por otro lado, los vaivenes de la demanda de productos primarios y la alta demanda de alimentos por los procesos de urbanización generan necesidades de importación en muchos países, que se incrementa también dadas las necesidades de la industria local. Esto marca la pauta para el agotamiento del modelo ISI al final de los años 70, con crecientes necesidades de financiamiento y estabilización de las economías, con lo que se justifica en toda la región el ingreso del Fondo Monetario Internacional, cuya política inicial era más estricta que durante la época de auge del Consenso de Washington, ya que le tocaba “enfrentar” regímenes nacionalistas, con alta participación estatal en la economía y con fuertes organizaciones de trabajadores.²³

Durante la segunda mitad de los 80 la política macroeconómica se configura casi exclusivamente sobre la base de los requerimientos de los planes de estabilización en un contexto dominado por fuertes restricciones externas, desequilibrios fiscales y, en algunos casos, aguda inflación. En consecuencia, el consumo y la inversión se limitan y el producto

²³ Si bien el modelo ISI no es motivo de análisis en el presente artículo, se debe recordar que las cifras económicas y sociales de los años 70 en Latinoamérica son las mejores desde esta época hasta el presente: las economías de la región crecieron más, eran menos pobres y menos desiguales durante los 70 que en los 90 y el primer quinquenio de 2000. Sólo en 2008, un poco antes de la recesión financiera, se registran valores similares a los de la década de los 70 e inicios de los 80. Aceptando que estos no son indicadores completos de bienestar y calidad de vida de las poblaciones, sí se podría intuir que el modelo ISI pudo haber tenido logros importantes que fueron detenidos con el volcamiento masivo hacia el modelo de ajuste económico neoliberal.

per cápita se reduce. La dedicación exclusiva y centrada en el eje económico olvida los costos derivados de la sobrevaloración cambiaria y los cortes de inversión pública.

De acuerdo a Falconí (2009) se pueden distinguir, en el marco del auge neoliberal, dos períodos en el ajuste: uno “fácil”, desde 1984 hasta mediados de los noventa del siglo pasado, y uno “difícil”, desde el segundo lustro de los 90 hasta avanzada la primera década de los 2000. En el primer período, y gracias al control del Estado, los sectores dominantes lograron conseguir políticas claves, como liberalizar el tipo de cambio y las tasas de interés y, lo más importante, desregular parcialmente el mercado laboral y el sistema financiero. En el segundo, se presentan mayores niveles de conflicto en torno a la orientación de los procesos de reforma estatal y, sobre todo, una más clara dinámica de resistencia social, liderada por el surgimiento y fortalecimiento de movimientos sociales en contra de las políticas neoliberales, especialmente la privatización de las empresas públicas. Las dificultades del segundo momento del ajuste neoliberal tuvieron que ver con el hecho de que la renovación del crecimiento por exportaciones fue inestable e insuficiente para enfrentar el crecimiento de la pobreza y desigualdad en los países.

Los ejes de la propuesta neoliberal fueron la apertura al mercado externo, la liberalización económica y la desregulación de la economía y las finanzas. La incompleta prioridad industrializadora de los años setenta fue sustituida por un énfasis en las exportaciones, mientras que las políticas de estabilización monetaria empezaron a desmontar la planificación centralizada. No obstante, la posibilidad de quebrar el intervencionismo del Estado fue diversa entre los países, de modo que, a pesar de una retórica anti-estatal, desde la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo pasado, se restablecieron tarifas y aranceles para ciertos productos importados, se volvió al control de precios para productos que habían sido desregulados y se reintrodujeron controles al mercado de cambios. Por otro lado, se continuó con incrementos relativos en el gasto público, en general procíclicos.²⁴

El proceso trunco de industrialización, las medidas restrictivas en el lado laboral, los consecutivos ajustes sociales, el crecimiento del sector in-

²⁴ Es decir, el gasto se eleva en períodos de crecimiento y se reduce en períodos de desaceleración o recesión.

formal, generan profundas brechas en salario (y por lo tanto ingreso), mostrando una clara contradicción en la lógica “dual” en la visión modernizadora del desarrollo. Los trabajadores y trabajadoras no pasan de un sistema tradicional a uno moderno, sino que este sector “moderno” se segmenta. Es decir, el proceso de inversión y cambio tecnológico permitieron elevaciones en la producción pero no el empleo, con lo cual se altera la relación capital/trabajo. La mano de obra nueva o excedentaria se distribuye entre un sector pequeño que corresponde a pequeñas o medianas empresas y otro bastante amplio, de baja productividad. El salario está represado por el crecimiento de este último sector, haciendo que el salario medio se mantenga bajo en el mercado, produciendo ganancias a los empresarios. En este contexto, además de los problemas de bajo o nulo crecimiento a partir de mediados de los años 80 (y la subsiguiente crisis de endeudamiento de la gran mayoría de las economías de la región) estas modalidades de desarrollo han significado una reprimarización de la economía pero también una profundización del “retaceo” económico, en el sentido de concentración de sectores grandes y dispersión de pequeños, aparecimiento de amplios sectores de autoempleo y microempresas en especial en sectores no transables²⁵. Así, se configura un modelo de “dualismo ampliado” caracterizado por: 1) la expulsión (o exclusión) de fuerza laboral de sectores más formalizados de la economía; y 2) la concentración de capitales, proveniente de los salarios bajos y flexibilidad laboral, así como de la segmentación de la demanda de trabajo que tiende a profundizar las desigualdades en el ingreso. Por otro lado, la relativa abundancia de mano de obra, acompañada por instituciones que limitaban el acceso a activos (tierra especialmente) y mantenían bajos los salarios en el campo (poderes económicos locales especialmente), profundizan estas desigualdades que ya estaban presentes a partir de las previas reformas agrarias que dejaron fuera a productores minifundistas, trabajadores estacionales o comuneros y trabajadoras mujeres (Figueroa, 1987).

Por otro lado, el surgimiento, en algunos países de la región, de regímenes neoliberales populistas a finales de los años 90, con alta orientación hacia fuera y economías desreguladas pero elevado gasto público y apoyo a las empresas y grupos de poder (el caso de Ecuador, Perú y Colombia), genera que los estados se endeuden, se conformen poblaciones cautivas dependientes de los beneficios de asistencia del estado

²⁵ Bienes que pueden ser comercializados internacionalmente.

y se debiliten las capacidades productivas por falta de una estrategia clara de producción, al igual que por la orientación productiva hacia la competitividad externa de bajo costo, con lo cual se ahondan los factores de transmisión de la desigualdad.

La alta conflictividad y complejidad política ha sido otro de los factores que signan estas etapas del recorrido económico de los países, y se ha convertido en muchas ocasiones el factor de “veto” frente a procesos internos de diseño de las políticas económicas y sociales. Así, los modelos latinoamericanos adoptan lineamientos y principios de políticas provenientes de las economías del norte y los organismos internacionales pero los filtran a través del tamiz del complejo entramado político de cada nación. Rasgos notorios de este proceso son: la incursión de partidos políticos integrados verticalmente, con orientación populista y fuertes coaliciones con los grupos económicos industriales (el caso de México); la presencia en varios momentos de gobiernos militares (en Centroamérica de los 50 y 60; en América del Sur de los 70 y 80s), que en unos casos promueven reformas industriales e inversión pública elevada que sostiene los procesos de industrialización (Brasil, Ecuador) y en otros rompen con la lógica del desarrollo endógeno e imponen regímenes extremadamente violentos en lo político y orientados hacia las reformas neoliberales (Chile, Argentina); la estructura de grupos de poder económico en muchos casos familiares, propietarios de tierras y tecnología (Centroamérica, Bolivia, Perú, Ecuador); la división de poderes entre regiones (Bolivia, Ecuador); la llamada “macroeconomía del populismo”, organizada por figuras muy fuertes, carismáticas, identificadas con la población “pobre”, cuyo manejo de imagen ha estado vinculado al mal uso de los recursos públicos; la presencia de grupos organizados de la sociedad civil, en muchos casos con alta presencia en la política y las políticas: el movimiento sindical en Argentina, el movimiento indígena en Bolivia, Ecuador; los movimientos campesinos en Nicaragua y El Salvador, entre otros. Si bien la clase industrial y empresarial no es tampoco un todo homogéneo en la región, no ha existido, salvo en pocos casos (Chile, por ejemplo), presencia política directa de estos grupos; su injerencia ha sido más bien indirecta de apoyo a uno u otro gobierno, o a través de sus vinculaciones con grupos financieros.

En el caso del movimiento de las mujeres, de acuerdo a Espino y Sanchís (2005), el debilitamiento de algunos regímenes autoritarios a

principios de los 80 también tiene como correlato el surgimiento de movimientos de mujeres y feministas, grupos de trabajadores y trabajadoras y otras agrupaciones sociales. Estos movimientos sacan a la esfera pública temas relacionados con violencia doméstica, discriminación, falta de participación política. Por otro lado, la crisis de la deuda que se inicia en 1982 también pone de manifiesto la gran carga social y económica que pesaba sobre el trabajo de las mujeres y los más pobres de la población, lo cual no tenía contrapeso en su participación política y su trabajo no remunerado, ni en su reconocimiento.²⁶ Estos procesos tienen como consecuencia hacia los años 90 en muchos países la conformación de instituciones gubernamentales para mujeres y equidad de género, que constituyeron un eje importante de críticas y propuestas de políticas.

A la par, en algunas regiones también se consolidan posiciones y reivindicaciones por parte de movimientos indígenas que ponen en la discusión propuestas de políticas de bienestar con orientaciones más identitarias con énfasis en diferencias interculturales dentro de algunos países en especial andinos.²⁷

1.2 RÉGIMENES DE BIENESTAR

Si bien durante los años 60 y 70 muchos estados latinoamericanos borronearon un modelo de bienestar más bien universal y otros un régimen dual (Filgueiras, 2000; Barba, 2005), a partir de mediados de los años 80 se fue configurando un régimen más homogéneo cuya característica principal es el énfasis único en la población pobre o en extrema pobreza, lo cual encaja con la visión neoclásica individualista del desarrollo. La “nueva política social” del enfoque neoliberal determina un cambio en su sujeto de política: de “trabajador y familia”²⁸ hacia un individuo pobre por consumo o ingresos. Es decir, se enfoca en una pobreza mercantil que será resuelta como otras “imperfecciones del mercado”,

²⁶ Se desarrollan en esta época algunos conceptos que luego serían utilizados para los planteamientos de política para la equidad de género en la región, tales como “autonomía” y “empoderamiento” (Espino y Sanchís, 2005).

²⁷ Estos movimientos tienden a perder su fuerza política durante los años posteriores, pero muchas de sus demandas han sido recogidas en instrumentos y agendas recientes.

²⁸ El sujeto directo de la política es el trabajador: hombre, formal, proveedor de su familia. Una de las principales limitaciones de este modelo es justamente que no pudo convivir con otros regímenes de trabajo, con la entrada de mano de obra de mujeres al mercado o con modalidades informales que nunca se incorporaron a los sistemas de seguridad.

con intervención estatal residual y subsidiaria, mientras el individuo se equipa para participar en el mercado.

En este contexto también se estrenan políticas de subsidios y redes de clientelismo en algunos países de la región. El proceso de transferencia de políticas desde el Consenso de Washington se manifiesta en la centralidad de lo económico y en la plenitud del modelo social residual, con incorporación estratificada a los servicios sociales en salud, educación y seguridad social, presentando alta segmentación regional y social.

El discurso que respalda esta modalidad de políticas es la consideración a la pobreza como un problema de iniciativa y oportunidades; y la puesta de la pobreza como tema central de la técnica política: buscar a los pobres, medir a los pobres, reducir el número de pobres. Si estas oportunidades —que toman la forma de accesos— son suplidas, se entiende que el individuo estará dotado para participar en el mercado, cuyas consecuencias distributivas se deberán atender en forma marginal. El discurso del capital humano apoya a esta visión individualista del bienestar.

Hacia el segundo quinquenio de los 2000 la región presenta cambios, continuidades y rupturas en la lógica de estos sistemas de políticas económicas y sociales. Estos cambios parten de algunas constataciones que reflejan el fracaso del modelo adoptado: una situación de desigualdad persistente y multidimensional; un modelo no basado en derechos en el que todo servicio o prestación es más bien un acto de “generosidad”, cuya calidad final es decisión de quien da (el estado, el sector privado o las ONGs), y donde la población beneficiaria no es más que eso, o debe “mostrar” su merecimiento; un proceso de desintegración social en el que las políticas han hecho que receptores y no receptores de beneficios sean asimilados a sujetos y no sujetos de derechos; persistencia de factores que mantienen la pobreza, en especial distributivos; debilidad del Estado y separación del mismo frente a la población, con presencia de intermediarios del llamado “tercer sector”, en manos de quien ha estado gran parte de la provisión para necesidades que no ha cubierto el Estado; poca efectividad de las políticas (por lo visto anteriormente), y nuevos factores de exclusión con la llegada de nuevos “pobres”, que más allá de las carencias de ingresos están al margen de los procesos de desarrollo productivo, de los beneficios estatales, del acceso a la información y conocimientos basados en la tecnología; unas estructuras

económicas rígidas, primarizadas y precarizadas, en las cuales el trabajo se intensifica pero se descalifica; la exclusión persistente de una gran parte de la población, crecientemente mujeres; y pocos o ningún cambio en las fuentes estructurales de la desigualdad.

En este contexto, se configura a partir de mediados de la primera década de 2000 un conjunto de políticas económicas y sociales “postneoliberales”, cuyas características se han organizado de acuerdo a 3 ejes conceptuales, explicados a continuación.

1.2.2 DESMERCANTILIZACIÓN DEL BIENESTAR

El primer rasgo característico de los regímenes de bienestar en Latinoamérica tiene que ver con lo que algunos autores y autoras llaman “mercantilización” del bienestar (Martínez, 2007) y se refiere a que el principal acceso a los servicios sociales básicos se da a través del mercado, en regímenes y/o periodos en los que el Estado deja de proveer estos servicios. En el caso de la seguridad social, algunos países que antes habían mantenido un modelo que priorizaba sistemas públicos de pensiones experimentaron movimientos hacia la mercantilización durante los años 90 a través de privatizaciones y seguros privados paralelos. En otros casos, habiendo nacido de una concepción universalista, los sistemas de seguridad social no alcanzan a cubrir a una gran mayoría de la población dada la lógica de las vinculaciones al mercado de trabajo (alta informalidad), lo cual resultó en una baja cobertura y alta estratificación de los sistemas de seguridad social (Bolivia, Nicaragua, Guatemala, por ejemplo)²⁹. Finalmente, varios países mantienen sus sistemas de seguridad social sin realizar cambios aunque con propuestas de reforma orientadas hacia incrementar la cobertura y formalización del trabajo para incorporar más beneficiarios. (Colombia, Perú, Paraguay).

En los años más recientes, un grupo de países de la región se mueven hacia la desmercantilización a través de la re-estatización de los sistemas, en especial en aquellos que fueron totalmente privatizados. También se han desarrollado regulaciones en torno a la incorporación obligatoria de beneficiarios no relacionados con trabajo formal en todos los países de la subregión (en algunos de ellos esto es obligatorio), y se

²⁹ En general la cobertura de pensiones de la seguridad social es históricamente baja. De acuerdo a Meza Lago (2008), la cobertura está relacionada con la formalidad, la antigüedad de los sistemas y el nivel de ingreso de los países y de las personas.

ha creado subsistemas para fortalecer los regímenes solidarios. Estos cambios a favor de la desmercantilización forman parte de los sistemas propuestos en Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil.

Otro grupo de países, en un más profundo proceso de desmercantilización, presentan y discuten propuestas innovadoras (en algunos casos ya convertidas en leyes). Una de ellas es la ruptura con la vinculación de la seguridad social y la remuneración, la consideración de este beneficio como un derecho universal vinculado esencialmente al trabajo, aun cuando este no sea remunerado (Ecuador).

Circulan también en la región otros debates hacia la radicalización de la desmercantilización, que proponen desvincular por completo la seguridad al trabajo y a cualquier otro tipo de contraprestación, y caminar hacia sistemas de renta básica, en donde solamente la ciudadanía proporciona el derecho a la recepción de las transferencias públicas. En este caso incluso el concepto de seguridad pierde su sentido esencial, dado que la renta básica está cubriendo un período continuo, no solamente aquel en el que el beneficiario o beneficiaria enfrenta inseguridad.³⁰

1.2.3 EL CONTENIDO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA SOCIAL

Un segundo eje de cambios tiene que ver con la relación del “régimen social” con el “régimen económico”. La visión tradicional hacía una distinción tajante entre la política “económica” y la política “social” a la hora de tratar la generación de ingresos y el empleo, y también al distinguir sus sujetos de política. En el primer caso “la economía” es la encargada de generar empleo y las personas de vincularse al mercado para trabajar y generar ingresos. Está, por otro lado, la política de financiamiento: a nivel macro para la gran producción y a nivel micro para las pequeñas economías y en especial para atender un sector creciente en los mercados de trabajo de los últimos tiempos: el autoempleo. Por su parte, la política “social”, que puede tener elementos de protección social vinculados con el trabajo, no está en el ámbito de “lo económico” o

³⁰ Estos planteamientos se encuentran en algunos de los documentos de propuestas de Agenda Social del MERCOSUR, aunque no están presentes en políticas específicas de sus países integrantes. Por otro lado, se están dando discusiones sobre este tema a nivel parlamentario basadas en debates recientes sobre derechos humanos “emergentes” en la declaración de Monterrey, uno de los cuales es precisamente el derecho a una renta básica universal.

del mercado en esta visión. Si alguna vinculación entre ambos ámbitos (social y económico) puede ser identificada en este modelo, es el énfasis que se ha puesto en el fortalecimiento del capital humano, orientado hacia la generación de mano de obra productiva que se vincule de mejor manera en el mercado de trabajo. En este contexto, el sector privado es el principal generador de empleo³¹. Se debe indicar que las mujeres han sido las principales sujetas de “lo social” en los países de la región³².

Si bien esta visión dual se mantiene en muchos de los regímenes de bienestar latinoamericanos, ya en algunos de ellos se empiezan a discutir nuevas estrategias orientadas hacia la generación de ingresos y promoción económica. Algunas de estas estrategias nacen de experiencias de sobrevivencia económica de las familias, y de iniciativas de la sociedad civil. Otras, provienen de la experiencia productiva ancestral comunitaria. Un rasgo común es, no obstante, que se trata de modalidades que no se enmarcan en el modelo de lo económico/social vigente, llegando en algunos casos (aunque a nivel de propuesta solamente) a constituir parte de una propuesta de ruptura con él.

Así, bajo el nombre de Economía Social y Solidaria se ubican tanto las experiencias sectoriales locales como las nociones y conceptos aplicables a la economía como sistema, cuyos elementos comunes tienen que ver con el ejercicio de unas relaciones económicas cuyo centro no es el mercado tradicional, y que no se sustentan (al menos, no primordialmente) en la acumulación capitalista. Si bien las propuestas teóricas provienen también de la academia europea (Alemana en especial) y se proyectan a la región latinoamericana (Argentina y Brasilera, en especial), las prácticas concretas de experiencias extendidas de sistemas denominados en un inicio “alternativos” de producción e intercambio tienen lugar en localidades de Brasil y Argentina, en muchos de los casos, como respuesta a situaciones de carencias, exclusión económica y crisis (en el caso de Argentina especialmente). Pilares fundamentales de estas experiencias son el trabajo, el intercambio y el comercio justo (precios), mecanismos alternativos de intercambio, la asociatividad y el trabajo en red. Este sector de la economía realiza transacciones, entrega y recibe recursos de los otros sectores (estado

³¹ Estas formas de vinculación, así como la visión de generación y protección de empleo basada en los mercados y en el trabajo formal en relación de dependencia, están vigentes en casi todas las legislaciones laborales de los países de la región.

³² Esta afirmación se argumenta más en detalle en el capítulo 2.

y empresas privadas), pero el funcionamiento a su interior puede ser muy diferente a ellos. Se debe señalar que las mujeres latinoamericanas han tenido un papel muy importante en estas economías³³. No obstante, si bien la consideración de los sistemas económicos como “sociales y solidarios” -con un conjunto de reformas que le devuelven al estado un rol redistribuidor activo- puede tener potencial en la reducción de la desigualdad estructural de las economías latinoamericanas, al mantener las estructuras inequitativas en el trabajo, muchas fuentes de estas desigualdades pueden mantenerse intactas.

A la par, dada la estructura de empleo de las economías de la región, la política de “microempresa/microcrédito” se amplía y generaliza. Si bien ya había sido considerada como un pilar fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres (en muchos casos también como respuesta a sus propias demandas sociales), muchas evaluaciones coinciden en su poca viabilidad e impacto en el bienestar de las mujeres, además de generar cargas adicionales de trabajo. De modo que la política post neoliberal plantea modificaciones como la vinculación con intervenciones orientadas hacia empresas medianas, programas de crédito en red con fuertes mecanismos organizativos y otras políticas de transferencias condicionadas a cadenas productivas y asociatividad (Chile y Argentina tienen elementos de política muy fuertes de apoyo a estas economías). La configuración de sistemas nuevos, que no arrastren los vicios de los anteriores en términos de exclusión, barreras a la salida, sobrecarga de trabajo para las mujeres y perpetuación de la pobreza, está aún en discusión.

1.2.4 SOCIALIZACIÓN DEL BIENESTAR

Un tercer elemento a discutir en torno a los cambios de orientación de políticas en la región, relacionado con el primero, es un proceso de “socialización” de la producción de bienestar, entendido desde el acceso a servicios provistos por el estado hasta la creación de empleo y trabajo en mejores condiciones a través de la re-institucionalización de la regulación laboral y el retorno hacia la universalización. Estos procesos no se han iniciado en la región, ya que uno de los principales elementos de privatización del bienestar en los regímenes de la región ha estado basado en el enfoque de transferencias monetarias, que se

³³ La relación de la economía social y solidaria, las relaciones de género y la economía feminista se discute en el capítulo 2.

mantiene como eje básico de la política social³⁴. Existen propuestas encaminadas hacia la eliminación (“graduación”), universalización del beneficio, o hacia la unificación con sistemas de renta básica o de “pisos de protección social” aún sin proyectos concretos en la región como ya se mencionó antes.

Como correlato a estos procesos todavía no extendidos de “socialización” y universalización, hay que recordar que la producción de bienestar de los países de la región (para los cuales existe información) está mayoritariamente “familiarizada”, con lo cual si bien se habla de socializar esta producción, muchos de los servicios sociales básicos para el cuidado humano han estado a cargo de las familias y del trabajo no remunerado de las mujeres más específicamente.

Ligado a esto, la limitada integralidad de políticas hacia la reducción de las desigualdades estructurales también se puede observar en la diversa y heterogénea programación de sistemas nacionales de cuidados y la no consideración de la economía del sector doméstico de cuidados como parte de la economía (salvo en algunos pocos casos). La redistribución para la equidad de género, entendida como de recursos, tiempo y trabajo (Rodríguez, 2010) todavía enfrenta fuertes inercias basadas en la inequidad en la organización social del trabajo y la producción, la fragmentación de los sujetos de política manteniendo en muchos casos el enfoque individual (o de hogares); el mantenimiento de la estructura primaria y la competitividad por ruta baja, es decir vía bajos costos, en especial laborales.

Finalmente, si bien los regímenes de políticas fiscales y sociales tienden hacia una mayor presencia del Estado en el gasto, regulación y protección, los sistemas de redistribución se mantienen al margen de las reformas económicas; por otro lado, la economía y la política económica continúan orientadas hacia un sector de la población que está inmerso en ella: formal, regulado, monetario; de modo que los esquemas o propuestas de redistribución vía sistemas tributarios tienen bajo impacto potencial.

En síntesis, entre las principales características de los enfoques propuestos por los regímenes de la época “post neoliberal” se distinguen

³⁴ Una revisión extensa de estos sistemas y de sus implicaciones para la equidad de género se encuentra en el capítulo 8.

continuidades fundamentales relacionadas con el mantenimiento de transferencias condicionales, la focalización en la pobreza en medio de la expansión de las redes (sistemas) de protección social; la apertura económica con matices diversos, claramente cambiante en periodos de crisis a través de medidas de protección directa; la poca preocupación por la calidad del trabajo y el empleo. También se pueden identificar transformaciones importantes en algunos países, orientadas a cambios en los sistemas de seguridad social, mayor participación (o al menos cambios en las modalidades de participación) de la sociedad civil y la comunidad, incorporación de nuevas modalidades de protección y beneficios sociales en torno a apoyos para la producción y los emprendimientos individuales y comunitarios; énfasis en la política fiscal contracíclica y mantenimiento de gastos básicos para el mantenimiento de condiciones mínimas de subsistencia, aunque todavía orientados a la familia como sujeto de la política. Los aspectos de ruptura tienen que ver con propuestas de nuevos enfoques de empleo, economía y estado que se han plasmado en los marcos constitucionales de algunos de los países de la región, en donde se incorporan nuevas formas de derechos económicos, reconocimientos del trabajo en sus diversas modalidades (incluido el trabajo de cuidados), enfoques comunitarios de trabajo y producción (solidarios, asociativos); y énfasis en un concepto integrado de soberanía que incluye la producción, el comercio y el consumo.

En la práctica, si bien se observan cambios hacia un modelo de estado con presencia activa en su rol de planificador y regulador, no se presenta un cambio en el sistema económico de base, sino más bien un alejamiento de la desregulación en la economía. La promoción de la producción y la demanda, incluida en ella la inversión, no son elementos básicos de los programas económicos; tampoco se incluyen reformas hacia la redistribución que rompan con la estructura concentradora del capital y las rentas³⁵. Se reconfiguran también los bloques intraregionales y se proponen nuevas posibilidades de integración, en las cuales se plantean esquemas novedosos que apuntan a cambiar las relaciones con el norte, de toda la región, aunque los países individualmente tienen muy diversos niveles y modalidades de relación, al igual que condiciones diferentes de inserción internacional.

³⁵ Con excepción de cambios propuestos para la distribución de la renta petrolera, en Ecuador y Bolivia

1.3 TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA: HECHOS Y DATOS SOBRE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS Y LA INEQUIDAD DE GÉNERO

En general, tres fenómenos clave han caracterizado el desempeño social y económico de la región Latinoamericana durante los últimos 25 años: 1) crecimiento económico con ritmos diferenciados entre países³⁶; 2) mejora progresiva en algunos de los indicadores que muestran dimensiones de bienestar: coberturas educativas (en básica y primaria casi en la totalidad de la población), reducción de la mortalidad infantil (todavía está distante de los países más desarrollados); 3) elevación de la pobreza y desigualdad de ingresos: en el primer caso con un comportamiento errático (relacionado con ciclos económicos) y en el segundo con una tendencia creciente más clara³⁷.

Estos comportamientos pueden ser explicados, de acuerdo a estudios realizados en la región, a través de varias dimensiones. La más importante, una dimensión estructural, hace referencia a una característica básica de la región latinoamericana (y la sudamericana específicamente): la heterogeneidad, generada especialmente por la inserción segmentada a los mercados laborales y productivos nacionales, al comercio internacional, a las tecnologías y a la información. Esta heterogeneidad es característica intra e internacional de Latinoamérica y para muchos autores es una de las causas de la desigualdad interna y la no convergencia entre las naciones de la región.

En este sentido, la CEPAL identifica tres tipos de agrupaciones económicas, en torno a los cuales se han acomodado los diversos sectores productivos: 1) empresas grandes articuladas con la economía global y la alta productividad; 2) empresas medianas y pequeñas, formales y con restricciones al acceso a financiamiento y tecnología; y 3) empresas micro y pequeñas, informales y de baja productividad y protección social. La visión económica tradicional hace referencia a la segmentación del mercado en economías duales, en línea con la visión del desarrollo como modernización que plantea además una equiparación del ingreso del trabajo fruto del incremento de la productividad en el sector “tradicional”. Esta

³⁶ Y en la mayoría de los países uno o dos eventos de crisis recesivas.

³⁷ En ambos casos, esta situación tiende a revertirse en años recientes, sin poder mostrar todavía una tendencia decreciente.

estructura de economías “triales” con poca movilidad de recursos entre sectores, que tiende a ahondar las desigualdades entre ellos, no puede ser analizada con este marco conceptual. Más aún cuando factores de la mesoeconomía causan una sobre representación en los segmentos laborales de menor calidad de las mujeres frente a los hombres, las personas indígenas y afrodescendientes frente a las mestizas; a las personas de estratos pobres y áreas rurales, frente a la población urbana.

Por otro lado, la falta de desarrollo de las instituciones que discurre entre un debilitamiento estatal hasta intentos de fuerte recuperación del Estado, la limitada definición de nuevos modelos de estado y la poca claridad en cuanto al funcionamiento de las instituciones del mercado (Altimir, 2008) han generado fundamentos débiles para la consolidación de una orientación redistributiva o menos aún, regímenes de crecimiento orientados por demanda³⁸.

Durante la década de los 90 y hasta los primeros años de los 2000 algunos países de la región sufrieron crisis macroeconómicas severas, tales como México y Honduras durante mediados de los 90; Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Brasil en 1999; Uruguay, Argentina y Venezuela alrededor de 2002. Estas crisis estuvieron asociadas con incrementos en la desigualdad y la pobreza, debidas a la alta vulnerabilidad de la región frente a los flujos externos de capital, en especial en Centroamérica, el Cono Sur y Brasil.

En este proceso de búsqueda de competitividad, en los países donde más creció la productividad (Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica, México) decreció el empleo y se deterioraron los indicadores de bienestar. La recuperación posterior también genera recuperación en los indicadores sociales³⁹, aunque puede estar asociada, de acuerdo a especialistas (CEPAL, 2009), a influencias del contexto internacional que luego sería cambiado con posteriores episodios de desaceleración y reducción de los flujos internacionales de financiamiento e inversión.

Por otro lado, la región se volcó a medidas orientadas a reducir la inflación, el déficit comercial y fiscal para responder a las crisis recesivas.

³⁸ Para definiciones sobre crecimiento orientado por demanda y beneficios, ver Bhaduri (2007).

³⁹ No es posible atribuir este mejoramiento en desigualdad y pobreza en su totalidad al crecimiento económico per sé, sino a la utilización que de estos recursos han hecho las políticas fiscales, además de mejoras en otros indicadores estructurales.

Los recortes de gasto se hicieron a menudo en el marco del gasto social y, de hecho, las economías se “ajustaron” vía desempleo, subempleo y otros costos sociales⁴⁰. La consecuencia de esto, más allá del puro ajuste por recesión fue, en muchos casos, la “instalación” de la precariedad laboral y la desigualdad, dado que la liberalización provoca también una reorientación de los recursos del trabajo hacia sectores de la producción exportable, más flexibilizados y con menos cobertura de protección laboral y social básica (Gasparini y Cruces, 2009).

Otros factores estructurales relacionados con la permanencia de la desigualdad, el errático comportamiento de la pobreza y las todavía bajas tasas de crecimiento relativo a otras regiones, tienen que ver con las reformas pro mercado que se implementaron durante los 80 y 90, muchas de las cuales incluyeron acumulación de capital y tecnología, pero expulsaron empleo y fueron sesgadas hacia mano de obra más calificada (Berry, 2008). Algunas de las reformas pro mercado fueron suspendidas e incluso revertidas entre 2005 y 2009, en parte también debido a una mayor estabilidad económica ocasionada por condiciones externas más favorables, que también favorecieron el crecimiento del empleo y los salarios reales. Estas condiciones económicas favorables han estado acompañadas además por otros elementos relacionados con la calidad de las capacidades y la calidad de vida de la población (la educación básica, por ejemplo), lo cual ha disipado ya en alguna medida el efecto del cambio tecnológico que demandaba, en décadas anteriores, trabajadores y trabajadoras con ciertas habilidades⁴¹.

Sin embargo, en muchos de los países esto no ha sido acompañado con mejoras cualitativas en el empleo, que se ha convertido por mucho en el punto más débil de las estrategias de políticas de los últimos años, además de que sufrió un embate fuerte durante la reciente crisis. Por otro lado, la recesión económica iniciada a finales de 2008 permite intuir que las ganancias en bienestar manifestadas durante los años 2002 a 2008 cuyo origen pudo deberse a la recuperación cíclica (o circunstancias externas favorables) pueden ser revertidas y que las causas más profundas de la desigualdad y la pobreza en la región deben ser enfren-

⁴⁰ Esta política cambia radicalmente en los años recientes, y en la mayoría de los países de la región hay una estrategia de “protección” de, al menos, ciertos gastos básicos necesarios (esta situación puede haber cambiado a propósito de la crisis reciente).

⁴¹ Este último proceso se detendrá cuando la barrera se marque en la educación superior.

tadas con cambios igualmente profundos de las estructuras sociales, económicas y políticas de los países.

Muchos estudios coinciden en que los programas de transferencias monetarias condicionadas han sido efectivos en la reducción de la pobreza, no obstante, evaluaciones más profundas permiten identificar efectos adversos en la equidad de género y en la pobreza estructural⁴². Adicionalmente, los esfuerzos recientes de muchos gobiernos en mejorar los servicios y el gasto social pueden haber incidido en estos procesos, pero persisten muchas de las dimensiones que perpetúan la pobreza y la desigualdad: la precaria condición del empleo, la estructura distributiva desigual⁴³, la todavía baja relación entre el progreso económico y la distribución del bienestar, la segmentación y heterogeneidad de su población.

1.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO

La desigual inserción al trabajo remunerado de las mujeres y su correlato en la carga de trabajo no remunerado están a la base de una gran parte de las desigualdades de género en el sistema capitalista (ver recuadro 1.1). Las críticas feministas plantean que la organización de este trabajo responde a un sistema de género que opera junto al sistema económico; por ello, las mujeres que lo realizan forman parte de la cadena del valor y del proceso productivo al generar fuerza de trabajo; el valor que se genera, al ser no remunerado, entra en el proceso de acumulación y es trasladado al capital. En este sentido, la pobreza de las mujeres transfiere recursos al sistema y se convierte en amortiguadora de las crisis sistémicas⁴⁴.

En América Latina existen regiones que muestran una relación clara entre los eventos de recesión económica, el incremento del desempleo y la feminización del mercado laboral así como la reducción de los salarios en general y la pobreza, con mayor profundidad en la pobreza de las mujeres. En general, durante los últimos 20 años se observan al respecto 3 tendencias: recuperación económica en términos de producción

⁴² Una explicación detallada de estos resultados se presenta en el capítulo 8.

⁴³ Si se analizan solamente algunos de los elementos más importantes, por ejemplo, la distribución de activos, capital humano y capital en general, se puede intuir que se mantienen en ellas altos niveles de desigualdad.

⁴⁴ Recuentos de estudios recientes sobre la relación entre desigualdad de género y crecimiento pueden verse en Seguino (2000, 2002, 2005, 2008,2009), Berik (2008), Brunstein (2008), Klasen (2002, 2009), Kucera (2002).

per cápita, reducción del desempleo en general con mantenimiento de las brechas entre hombres y mujeres, incremento de la participación laboral femenina con comportamientos procíclicos en épocas de recesión económica y ubicación de la fuerza de trabajo femenina en sectores de baja productividad y gran movilidad.

Recuadro 1.1

Mujeres y el empleo en el capitalismo: brevísima trayectoria histórica

A inicios del siglo XIX el trabajo de las mujeres era muy importante en la agricultura y manufactura, cuando el espacio de producción no estaba acotado a la esfera pública. La industrialización modernizadora produjo esta distinción y generó que las mujeres se retraigan hacia el ámbito privado y el trabajo doméstico mientras su ingreso a las fábricas era en calidad de trabajadoras secundarias, en épocas de crisis económica o durante las guerras. Trajo consigo también la profundización de la segregación ocupacional: la inserción ocurrió en las actividades afines a las tareas domésticas, en sectores de lento avance tecnológico, en talleres y previa adaptación, a través de visitas acompañando a sus padres y maridos a las fábricas.

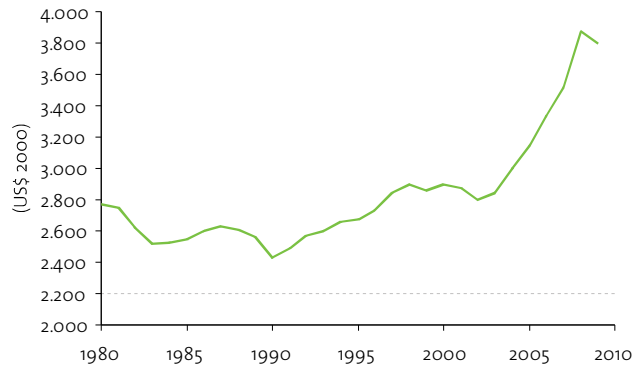
En la segunda mitad del siglo XIX con el auge del capitalismo industrial, la reducción de la presencia femenina en la fuerza laboral es notoria, al igual que las crecientes brechas de salarios: los salarios de los hombres crecen junto al crecimiento de los países y de las industrias, y se naturaliza el salario familiar, vínculo con la asistencia social en el modelo familiar de proveedor/ama de casa occidentalizado que adecua las nociones de progreso y tecnificación a una “economía doméstica eficiente” y funcional al trabajo del jefe de hogar. En América Latina, la inserción y retracción ocurren en oficios poco calificados y mal remunerados, aunque con menor intensidad de segregación que en el norte; por otro lado, el salario familiar opera parcialmente, debido a las limitaciones de los esquemas de seguridad social y del tipo de industrialización. Se producen barreras a la entrada desde el sindicalismo mayoritariamente masculino, que refuerzan la discriminación y la lucha de las mujeres en el ámbito público.

Así, rige un “pacto social”, en el cual se acepta y asume la noción de trabajo como empleo estable y con seguridad social pensado como un derecho individual. En las últimas décadas del siglo XX los cambios en las necesidades del sistema económico, demográficos, educativos y políticos generan que este pacto se modifique parcialmente con una nueva oleada de participación laboral femenina a partir de los años 60 en Europa y Estados Unidos, y 70s en América Latina. Esta participación no tiene como correlato la reducción de la dedicación al trabajo de cuidado por parte de las nuevas empleadas, y más bien se da paso a modalidades de trabajo que intentan “adecuar” los dos ámbitos del trabajo. Estas modalidades conviven, en el caso de América Latina, con regímenes no regulados en especial en la agricultura de subsistencia, que no ha dejado de ser una actividad clave de las mujeres para la sobrevivencia familiar.

Fuente: elaborado en base a Humphries (1997), Carrasco (2001) y Arenas (2003).

En el gráfico 1.1 se presenta la tendencia regional de su producto per cápita, cuyo crecimiento se refuerza a partir del 2000, por las razones ya citadas. Cabe señalar que las economías con mayor crecimiento a partir de este año están ubicadas en América del Sur.

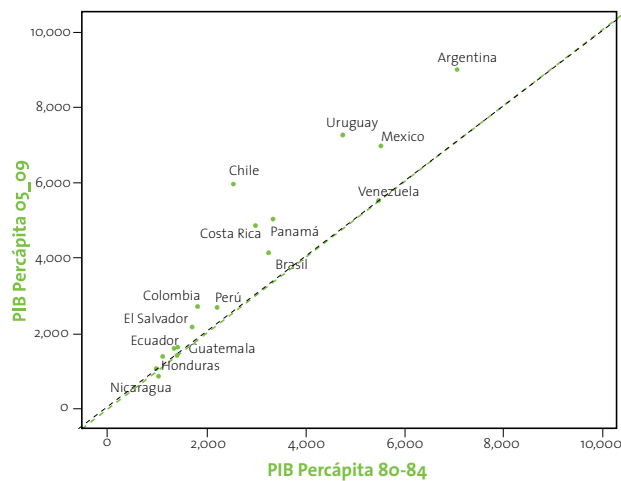
Gráfico 1.1. América Latina: PIB per cápita



Fuente: PENN World Tables, 63, World Economic Outlook 2010. Elaboración: Propia

Si bien en toda la región el PIB per cápita en el último quinquenio es mayor que el primer quinquenio de los 80, sólo unos pocos países son claramente “más ricos” que hace 30 años: Argentina, México, Costa Rica, Uruguay y Chile. Los demás países presentan valores similares de producto per cápita de los años 80, como se muestra en el diagrama 1.1, en el cual se correlaciona el PIB per cápita de ambos períodos.

Diagrama 1.1. PIB per cápita América Latina períodos 80-85 y 05-09



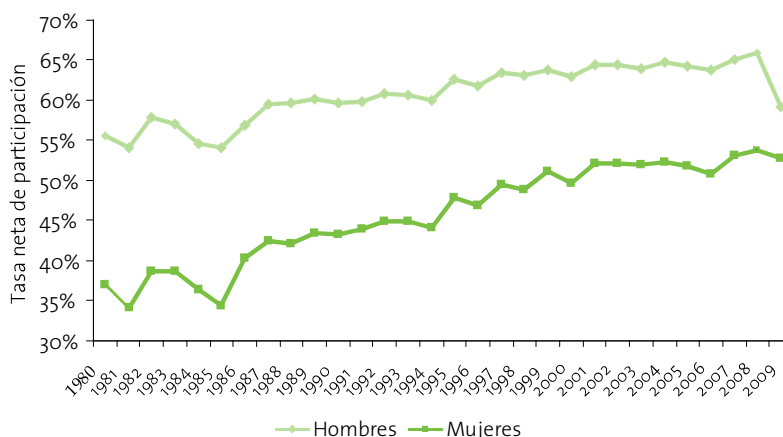
Fuente: Sistema estadístico de CEPAL (CEPALSTAT), varios años. Elaboración: Propia

Por otro lado, este comportamiento también muestra que aparentemente no existe convergencia en el crecimiento económico, es decir que la velocidad a la que crecen los países se mantiene en el tiempo, con lo cual las diferencias entre ellos también se mantienen. En cuanto a la velocidad del crecimiento en las economías en particular, los países que mayor aceleración presentan en la subregión entre 1980 y 2008 son Chile, Uruguay y Colombia, los últimos dos con tasas de crecimiento bastante similares entre los primeros y últimos años de la época. Por otro lado, Venezuela, Perú, Uruguay y Argentina tienen ritmos de crecimiento bastante mayores durante los años recientes, frente a inicios de período. Ecuador, Paraguay y Brasil crecen a ritmos similares en los primeros años de los 80 y los últimos de los 2000, y su crecimiento per cápita anual de estas tres décadas es relativamente bajo frente a la subregión. Bolivia, que decrecía a inicios de 1980 presenta actualmente modestas tasas de crecimiento.

En relación a la época más reciente, el crecimiento de las economías entre 2002 y 2008 se constituyó en la mayor expansión continua de la región desde los años 70. Los países que habían salido de crisis previas fueron los que más crecieron, pero toda la región en general se ubicó, en términos per cápita, en un estrato de nivel medio mundial (PNUD, 2009). Este crecimiento se refuerza, a decir de CEPAL (2009) gracias a circunstancias externas favorables como el incremento de los precios de los productos primarios (entre ellos el petróleo), un influjo favorable de financiamiento, y la reducción de la dependencia de recursos de endeudamiento, entre otros.

Por otro lado, una tendencia histórica clara en la región ha sido el incremento de la participación laboral de las mujeres, con una mayor aceleración durante los últimos años de los 80 y la década de los 90 (ver gráfico 1.2), que ocurre paralelamente a incrementos en los niveles educativos y retardo en la edad de maternidad, así como a mayor cobertura de servicios básicos (Blau, 2006).

Gráfico 1.2. América Latina: participación en el mercado laboral



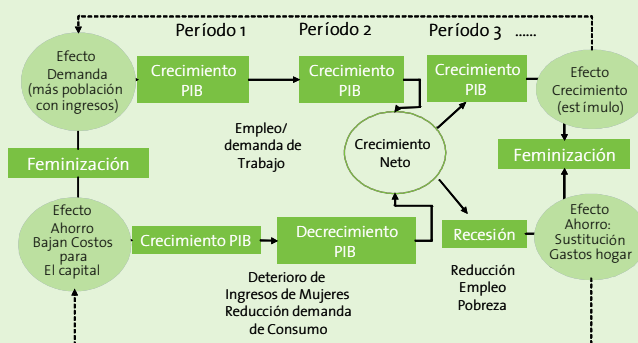
Fuente: Sistema estadístico de CEPAL (CEPALSTAT), varios años. Elaboración propia.

Esta tendencia a la feminización de la división global del trabajo permite develar una relación entre la participación laboral de las mujeres, y el nivel y crecimiento del producto per cápita de las economías. Para Ertürky y Darity (2000), esta relación puede darse a través de dos canales: 1) *canal de la reproducción*, que genera efectos positivos si en un período de crisis las familias “sustituyen” gastos por trabajo no remunerado; y efectos negativos si el “ahorro” que genera el trabajo doméstico no remunerado de cuidados se reduce al ingresar las mujeres al trabajo remunerado; 2) *canal del mercado laboral*, que puede tener un efecto positivo dada una brecha salarial de género preexistente; o negativo, si esta brecha presiona y hace que el salario medio baje, al menos en el corto plazo, generando reducción en la capacidad de consumo de las mujeres y las familias. Estos mecanismos operan en el ámbito macroeconómico a través de una combinación de cambios en el ahorro y la inversión: el ahorro promovido por el trabajo doméstico no remunerado y la inversión promovida por las reducciones del costo laboral cuando las mujeres ingresan al mercado (ver recuadro 1.2).

Recuadro 1.2

La feminización del trabajo y su relación con el ahorro, la inversión y el equilibrio económico

- Se asume que la fuerza de trabajo femenina es contracíclica (aumenta en las crisis) y que la feminización de la fuerza de trabajo y el trabajo doméstico se mueven juntos.
- La feminización laboral incentiva por un lado un mayor consumo (porque hay más población asalariada) y por otro mayor inversión con menores costos.
- La capacidad de ahorro de las familias se incrementa gracias a la intensidad del trabajo doméstico que produce bienes que ya no se compran en el mercado.
- En tasas bajas de crecimiento, la feminización crece. Pero ésta estimula la inversión. La feminización trae también mayor intensidad de trabajo doméstico que impacta en los ahorros familiares y de la economía. La combinación de estos dos efectos tienen incidencia directa en el equilibrio económico y el nivel de crecimiento.

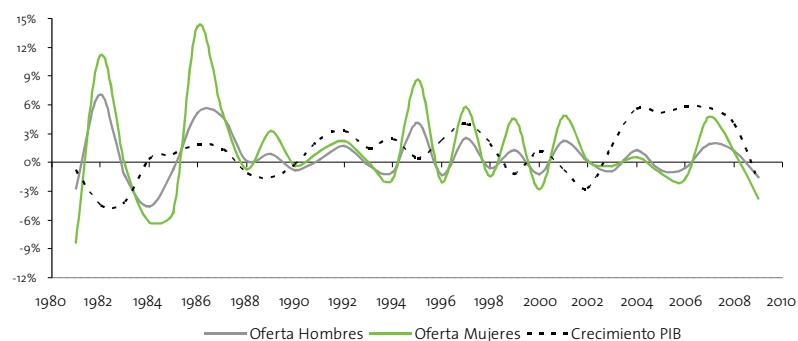


Fuente: Elaboración propia en base a Ertürk y Çağatay (1995)

Para estos mismos autores, la feminización laboral permite identificar también tres modalidades de inserción. La primera, de tipo procíclica, en la que la mano de obra de las mujeres se comporta como un ejército de reserva flexible que se incrementa en crecimiento y disminuye en recesión. La segunda, segmentada, en que la entrada o salida de las mujeres depende de la composición de los sectores y ocupaciones que son afectados por los ciclos económicos: en este sentido, dependiendo de la racionalidad del ciclo económico, puede haber comportamientos procíclicos o contracíclicos. La tercera modalidad indica que la mano de obra femenina sustituye a la masculina en situaciones de crisis de desempleo. Igualmente, el mercado puede inclinarse hacia cooptar personas con menores expectativas de salario, pero que puedan realizar un trabajo similar, con el fin de ahorrar costos en una situación recesiva.

Así, se puede verificar que en América Latina si bien la oferta laboral de hombres y mujeres es contracíclica, la oferta femenina es más inestable y volátil, y por ende más susceptible a lo que ocurra con la economía. También es una mano de obra que ingresa rápidamente a la búsqueda de empleo, en un ambiente de desempleo o despidos, porque está dispuesta a aceptar menores salarios. El gráfico 1.3 muestra el comportamiento contracíclico de la oferta laboral, salvo en dos periodos: finales de los años 80 en que la economía tiene un repunte y crece mucho la participación en especial de las mujeres, y durante las crisis de finales de los 90 e inicios de los años 2000 en que las ofertas de trabajo de hombres y mujeres decrecen y se restablecen junto a la recuperación del PIB.

Gráfico 1.3. América Latina: crecimiento de la oferta laboral y crecimiento económico



Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina; CEPALSTAT, varios años. Elaboración propia.

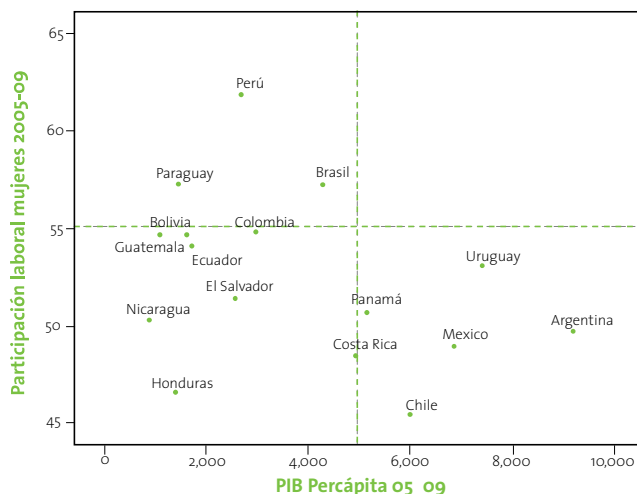
No obstante, al analizar el efecto que la feminización laboral tiene sobre la tasa de crecimiento económico a nivel de ciclos cortos, Vásconez (2010) encuentra que la mayor participación de mujeres respecto a hombres (tasa de feminización o relación de tasas de participación) es positiva y significativa para la recuperación económica, para 5 países de la región (Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil). Este efecto positivo se incrementa al ampliar el ciclo, con lo cual se podría inferir que las mujeres ingresan al mercado en situaciones de crisis y este ingreso soporta en forma positiva la recuperación de las economías latinoamericanas. En términos del esquema del comportamiento secular de la feminización del mercado laboral descrita por Ertürk y Darity (2000), se

puede indicar que las economías latinoamericanas podrían estar entre la “segmentación” y la “substitución”, lo cual indica una mayor participación de las mujeres en períodos de contracción.

En lo relacionado con el comportamiento secular de estas dos variables (crecimiento y feminización del mercado laboral), los mismos autores plantean que para etapas o niveles bajos de crecimiento se puede intuir que existiría una alta participación laboral de las mujeres aunque con bajos salarios; esta situación se revierte hasta llegar a niveles de ingreso per cápita medio en que la participación puede ser un poco menor a medida que la economía adquiere un cierto nivel de industrialización y urbanización (relacionados estos con mayor crecimiento). En un nivel medio de crecimiento, la participación alcanza un mínimo, para luego comenzar a elevarse cuando a la par se elevan las condiciones laborales, es decir, crece la participación pero “de mejor calidad”.

Para el caso de América Latina, los países de la región se ubican desde el promedio hacia abajo del PIB per cápita medio mundial. Dos grupos de países estarían, de acuerdo a la posición de la feminización laboral frente al PIB per cápita, en la lógica del comportamiento observado por este autor: un primer grupo, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay presentan altas tasas de feminización laboral y bajo PIB per cápita. En el otro extremo, los países de mayor PIB per cápita de la región, Uruguay, México, Chile y Argentina, presentan menor participación. El segmento medio que estaría de acuerdo con esta ubicación está conformado por Costa Rica y Panamá. Por otro lado, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras tienen bajo PIB per cápita pero también baja participación femenina en la PEA, con lo cual se podría entender que están fuera de esta lógica de feminización-crecimiento, las economías no estarían brindando oportunidades de trabajo pero tampoco se presentan como mano de obra sustituta o relativamente barata frente a la masculina.

Diagrama 1.2. América Latina: posición en PIB per cápita y participación laboral de las mujeres



Fuente: Anuario estadístico CEPAL 1950-2008, CEPALSTAT, 2010. Elaboración propia.

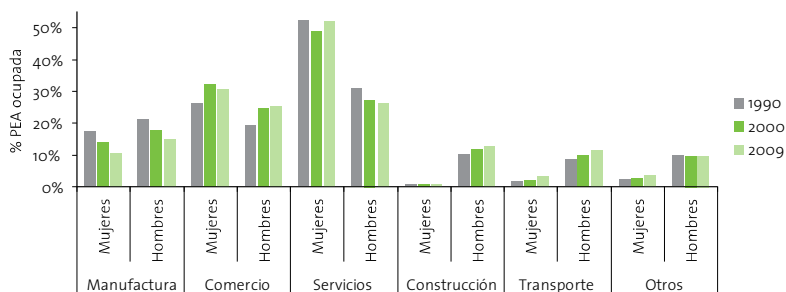
Se debe indicar, en línea con este mismo marco conceptual, que la existencia de brechas salariales entre hombres y mujeres efectivamente incentiva la velocidad de recuperación de la economía y el crecimiento de corto plazo, pero en el mediano plazo se presenta la relación opuesta, lo cual plantea la existencia de un efecto de reducción de la demanda potencial dado por las brechas de género. También se puede intuir que existe una orientación procíclica del salario medio, contrariamente a lo que predicen los modelos de ciclos económicos y las teorías clásicas de la productividad (Vásconez, 2010).

Por otro lado, no existe evidencia empírica en la región sobre el “canal de la reproducción”, pero de acuerdo a Vásconez (2010) si bien existe una relación directa entre la feminización laboral y el crecimiento, las horas de trabajo (intensidad y jornada completa) inciden inversamente en los períodos de recuperación económica entre 2003 y 2009; con lo cual se podría suponer que estas horas dedicadas al trabajo del mercado y por ende deducidas del trabajo doméstico puede estar generando un desahorro para el sistema económico.

En el contexto de las oportunidades de generación de empleo y crecimiento, se debe indicar que, en línea con lo descrito por la CEPAL sobre la persistencia de heterogeneidad estructural, la composición de la producción en la región no ha variado en mayor medida en 15 años. En el gráfico 4 se puede observar que el sector con mayor aporte al producto interno bruto son los servicios y el sector más dinámico el transporte. Las economías son en general más abiertas que en 1990, en especial las Centroamericanas y la Mexicana; se reduce el aporte de la agricultura y la manufactura en Centroamérica. En 2009 se encuentra una mayor orientación hacia la manufactura en Perú, El Salvador, Costa Rica; una presencia importante de la producción agrícola sobre el PIB en el resto de Centroamérica, y una expansión de los servicios en los países del Cono Sur y Brasil. Por otro lado, se aprecian economías con tendencia extractivista en Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En términos de generación de empleo, el sector servicios y comercio son los mayores generadores de trabajo en especial para las mujeres, llegando al 80% de su población ocupada. Y las oportunidades de trabajo en la industria, siendo bastante bajas, se han reducido en 15 años (del 18% al 16% de la PEA ocupada). En el caso de los hombres se eleva también el empleo en servicios y se reducen las plazas de trabajo en la agricultura.

Gráfico 1.4. América Latina: empleo por sector, áreas urbanas



Fuente: CEPAL, *Panorama Social de América Latina*, varios años. Elaboración propia.

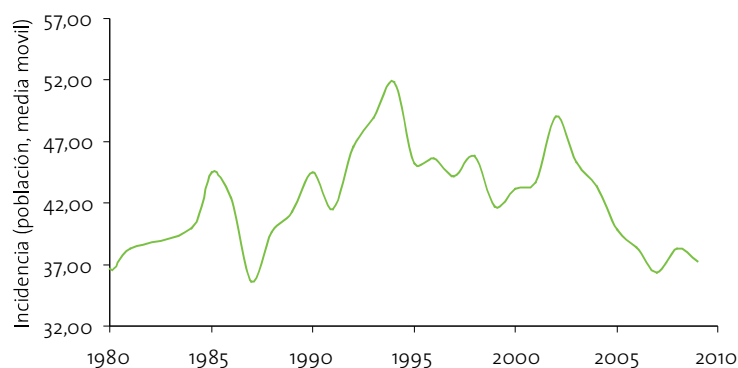
1.5 POBREZA Y GENERACIÓN DE INGRESOS DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS

El comportamiento de la pobreza por ingresos en Latinoamérica ha sido poco homogéneo pero con tendencia creciente a partir de la década de los 90 hasta inicios de los años 2000. De hecho, para alcanzar los mismos niveles promedio de los años 80, la región ha debido pasar cerca de 30 años de estrategias basadas principalmente en regímenes llamados “orientados al mercado”. Actualmente, un poco más de un tercio de la población latinoamericana es pobre, y cerca del 13% indigente⁴⁵.

En épocas más recientes, la pobreza se ha mantenido más o menos estable, con reducciones a partir de 2002. No obstante, las tendencias regionales ocultan realidades distintas. Mientras que casi todos los países han logrado reducir la pobreza desde el 2002, Chile, Ecuador y Brasil lo han hecho en forma constante desde 1990. Otros países, como Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela han obtenido resultados variables, con aumentos y disminuciones significativas, y otros como Bolivia mantienen las mismas tasas hasta 2006 y recién presentan reducciones a partir de 2007. En el gráfico 5 se puede apreciar que la elevación que se presenta hacia el final de los años 80 no puede revertirse sino hasta la segunda mitad de los 2000. Los países más pobres en 1990 estaban en Centroamérica (Honduras, Nicaragua y Guatemala) y la región Andina (Ecuador, Bolivia y Colombia); en 2009 la situación cambia para Ecuador y Colombia, y pasan a superarlos Paraguay y El Salvador.

⁴⁵ De acuerdo a la línea de pobreza de cada país.

Gráfico 1.5. América Latina: pobreza 1980-2009



Fuente: CEPAL, Panorama Social, varios años; CEPALSTAT. Elaboración propia.

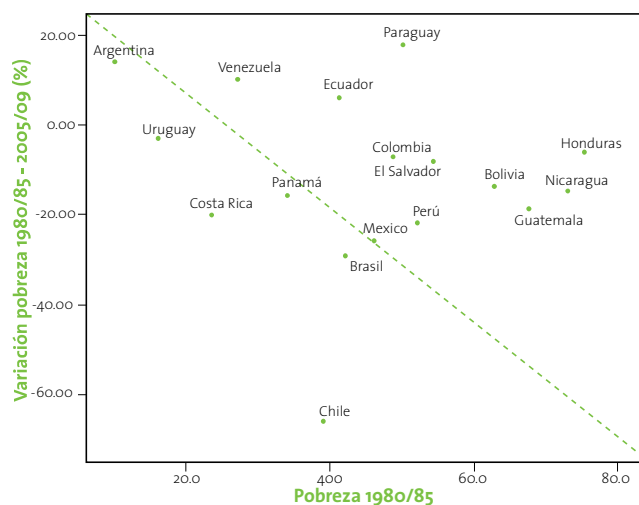
El análisis de convergencias⁴⁶ permite medir la tendencia de los valores de una variable en el tiempo, para un conjunto de países (o regiones geográficas en general). El diagrama 1.3 permite observar la relación entre la pobreza en los años 80 y la tasa de crecimiento de la pobreza entre los 80 y los 2000⁴⁷. Los países que se ubican hacia el lado derecho han partido de una situación de mayor pobreza en los 80; los países ubicados en la sección superior han tenido un crecimiento más elevado (o un decrecimiento más lento) de la pobreza. Esto quiere decir que aquellos que se ubican hacia la esquina superior derecha eran los más pobres en los 80 y a la vez los que mantienen tasas más altas de crecimiento de este indicador; este es el caso de Honduras, Nicaragua, Bolivia, Colombia y Paraguay, que si bien han experimentado un decrecimiento en la pobreza, éste ha sido lento en comparación con el resto de economías de la región, habiendo partido de una situación de mayor pobreza relativa. El mismo ritmo de decrecimiento se ubica en Uruguay, Costa Rica y Panamá, pero estos países han partido de una mejor situación relativa. Por otro lado, Argentina, Venezuela y Ecuador tienen tasas positivas de crecimiento de la pobreza entre 1980 y 2009 habiendo partido, especialmente los dos primeros, de niveles relativamente bajos en los 80. Finalmente, México, Perú, Guatemala, y en especial Brasil y Chile experimentaron altas tasas de reducción en la pobreza, habiendo sido países de nivel medio a inicios de los 80.

⁴⁶ Ver glosario.

⁴⁷ Convergencia "beta". Ver glosario.

Un proceso de convergencia absoluta hubiera mostrado que los países más pobres debieron reducir su nivel de pobreza más rápido. Esto no es evidente bajo este análisis descriptivo, con lo cual se puede intuir que los paquetes de políticas y esfuerzos hacia la reducción de la pobreza durante los últimos 30 años han conseguido como máximo alcanzar los niveles de inicios de los 80, como se mencionó antes. Muchos países con altos índices de pobreza durante los 80 presentan todavía altas tasas de crecimiento de este indicador durante los últimos años y otros con índices bajos de pobreza la incrementan. Si se analiza particularmente el año 2009 en que la región eleva sus niveles de pobreza como producto de la crisis reciente, se puede observar que esta elevación estuvo en algunos casos en alrededor de 3 puntos (como en el caso de Ecuador y Perú, de acuerdo a estimaciones de los institutos de estadística de estos países), con lo cual se intuye que una de las causas de reducción de la pobreza entre 2006 y 2008 (los precios de los commodities), podría haber sido a la vez generadora de un nuevo repunte en este indicador.

Diagrama 1.3. Convergencia beta para pobreza en América Latina

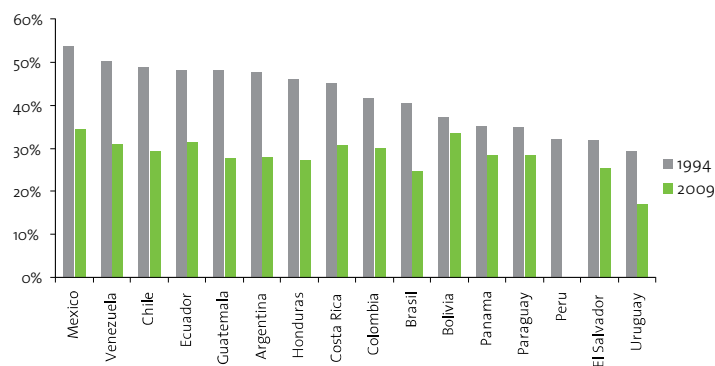


Fuente: CEPAL, Panorama Social, varios años. Elaboración propia.

Si bien estos indicadores muestran únicamente la dimensión del ingreso, la pobreza de los hogares y las personas en promedio también está relacionada en la mayoría de los casos con pobreza de índole más

estructural. En el caso de las mujeres latinoamericanas, la evidencia empírica muestra que les es más difícil transformar sus capacidades en ingresos, dada una desigualdad estructural en el ámbito público y privado, y esto las coloca en una situación de desventaja económica. Las mujeres por ende trabajan más pero tienen menor comando sobre sus recursos, y lo que producen no siempre se refleja en ingresos monetarios. Por otro lado, una gran proporción de mujeres latinoamericanas no genera ingresos, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. No obstante, esta situación ha mejorado mucho durante los últimos 15 años, en especial para los países con mayor incidencia de este fenómeno en el pasado (ver gráfico 1.6).

Gráfico 1.6. América Latina: mujeres entre 25 y 60 años sin ingresos propios



Fuente: Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL, CEPALSTAT, 2009. Elaboración propia.

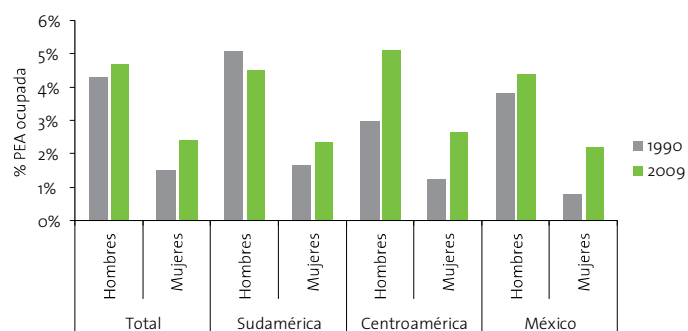
Por otro lado, las mujeres en general tienen poco comando sobre activos y propiedades, con lo cual están en dificultades mayores para enfrentar situaciones de crisis o inestabilidad. De acuerdo a Deere (2009), durante los primeros años de los 2000, solamente entre el 10 y 30% de mujeres eran dueñas de sus parcelas agrícolas; y entre el 13 y 32% de sus viviendas (para Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Ecuador). Por otro lado, la propiedad de los negocios es un poco menos inequitativa (40% de las mujeres son propietarias), pero en la mayoría de los casos el acceso a propiedades ha sido para las mujeres por herencia (más de la mitad de las mujeres propietarias han accedido bajo este esquema (en Brasil, Chile, Ecuador, México, Nicaragua y Perú), mientras que la relación con el mercado es bastante baja, llegando como máximo a 33% de las propietarias (en Nicaragua). No obstante, para esta misma autora, el re-

cuento de las propiedades de hombres y mujeres permite relativizar el concepto de “jefatura de hogar”, ya que en conjunto el comando sobre recursos de las mujeres frente al de los hombres es mayor, en términos relativos, que la proporción de jefatura femenina sobre masculina, para los años recientes.

En esta misma línea, la capacidad de llevar adelante iniciativas y emprendimientos económicos es bastante limitada en toda la población latinoamericana, ya que las economías de la región tienden a situar en el sector de “microempresa” o autoempleo a una gran parte de la población ocupada, pero no se trata de un sector generador de ingresos o ahorro, o peor aún representa posibilidad alguna de crecimiento de producción o encadenamientos; en la mayoría de los casos las pequeñas (incluidas las individuales) unidades económicas permanecen así en el tiempo, perpetuando la desigualdad. Esta segmentación de los mercados responde a la estructura “trial” mencionada anteriormente.

Es así que para 2009 la mayoría de mujeres empresarias se encontraban al mando de microempresas; la mayor participación de empresarias está en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. En el caso de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia y Uruguay, casi todas las mujeres empresarias corresponden a unidades microempresariales. Estas tendencias han crecido entre 1990 y 2009, pero su desempeño y sus resultados en términos de ingresos, independencia económica y sustentabilidad permiten señalar que si bien estas fuentes de empleo son más flexibles y compatibles con su dedicación familiar (Valenzuela, 2005), también generan ingresos bajos con lo cual las mujeres pueden mejorar en algo su situación pero esto no se ha constituido en una estrategia que permita revertir las desigualdades en bienestar, ingresos y pobreza entre sexos.

Gráfico 1.7. América Latina: patronos y patronas de microempresas por subregión



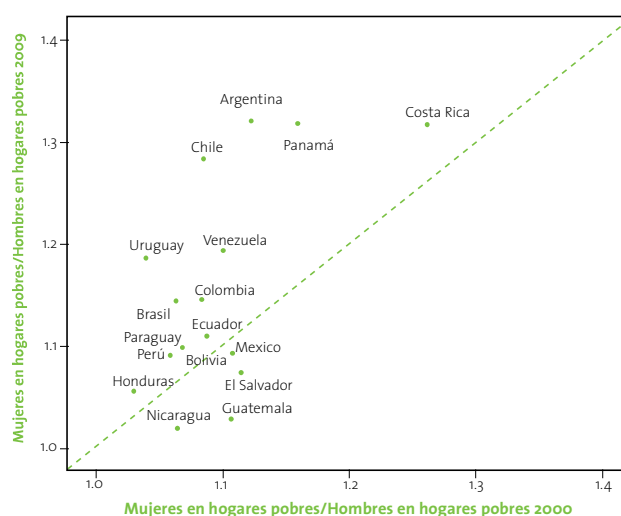
Fuente: Panorama Social de América Latina, 1990, 2009. Elaboración propia.

Por otro lado, la población autoempleada y la que trabaja en microempresas (sin ser patrona) también está relacionada con trabajos de baja calificación y no legalidad en términos de afiliación a la seguridad social, declaración de impuestos y contabilidad. En 1990 el 52% de mujeres y el 41% de hombres latinoamericanos se emplearon en sectores de baja productividad; el 30% de mujeres y el 25% de hombres eran autoempleados; estos porcentajes cambian a 53% y 43% en baja productividad; 32% y 28% en autoempleo en 2009 (de acuerdo al Panorama Laboral OIT, 2010). Estos datos permiten intuir que existe una tendencia hacia el abandono del empleo en relaciones de dependencia hacia las unidades económicas pequeñas o el trabajo por “cuenta propia”.

De esta forma, se puede apreciar que la situación de relativa pobreza de las mujeres no se ha conseguido revertir durante la última década. De hecho, el diagrama 1.4 muestra que la relación entre la proporción de mujeres frente a hombres en hogares pobres se ha incrementado: la gran mayoría de los países se sitúa por sobre la diagonal, es decir, exhibe índices de feminidad de la pobreza más altos en 2009 que en 2000. En promedio, este índice se ubicó alrededor de 1,25 para 2009 (frente a 1,05 en 1999). En comparación con los indicadores generales de pobreza de los países, también se encuentra que aquellos países con mayores tasas de feminidad de la pobreza tienen, en general, menores tasas de pobreza de toda la población. Esto quiere decir que, por un lado, el análisis de la pobreza por hogar oculta importantes diferencias dentro de los grupos de población, y por otro, que en muchos casos las estrategias de superación de la pobreza del estado y de las familias pueden haber

estado asentadas en el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres de estas familias (habiendo trasladado los servicios del estado al trabajo de cuidados, por ejemplo).

Diagrama 1.4. América Latina: feminidad de la pobreza entre 2000 y 2009



Fuente: CEPALSTAT, varios años. Elaboración propia.

Por otro lado, la proporción de mujeres como principales receptoras de ingresos se ha incrementado en la región entre 1990 y 2009, en parte como consecuencia de la reciente crisis y la emigración, en especial en los países centroamericanos, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina y Perú. El promedio de mujeres principales receptoras en la región a 2009 es de 30% (CEPALSTAT), oscilando entre 27% (Chile) y 45% (El Salvador). Si se relaciona este indicador con los indicadores generales de pobreza y su tasa de feminidad se puede indicar sin embargo que el hecho de ser receptora principal no implica ubicarse en una mejor situación de ingresos o bienestar individual o del hogar. De hecho, persiste una relación directa entre hogares con jefatura femenina y pobreza del hogar. Sin embargo, de acuerdo a Valenzuela (2005) esta “feminización” de la pobreza puede estar influenciada en gran parte por la monoparentalidad, en especial en los hogares llevados por madres jóvenes. Es decir, si bien existe una sobrerrepresentación

de hogares pobres e indigentes entre los de jefatura femenina, no se puede atribuir este hecho solamente a diferencias en la generación de ingresos de las mujeres frente a los hombres, aunque sí a otros aspectos de género en las relaciones familiares.

Estas tendencias permiten observar la existencia de varias carencias en la generación de recursos materiales para las mujeres, y las estrategias frente a estas carencias pueden estar provocando la concentración o el estancamiento de las mujeres en cierto tipo de actividades de baja calidad y generación de bienestar. Estas carencias son reconocidas por las mujeres, quienes valoran en primera instancia la posibilidad de ejercer comando sobre recursos y también la seguridad o el acceso a activos mínimos como dimensiones importantes de reducción de la pobreza (ver recuadro 1.3).

Recuadro 1.3
Percepción de las mujeres quiteñas sobre la pobreza inmediata y estructural

Al ser preguntadas sobre cómo perciben la pobreza, las mujeres quiteñas la relacionan con la incapacidad de cubrir las necesidades de la familia que es a la vez un factor de angustia y temor: “ser pobre es algo muy triste, porque a veces uno tiene para una cosa y no para otra. A una le da ganas de llorar porque a veces le mandan a pedir algo en el colegio y como uno no tiene, no les podemos dar a los hijos lo que nos piden. Por eso la pobreza es muy triste” (Verónica, noviembre 2004); y la familia pasa a ser su responsabilidad única cuando están casadas: “antes estaba mejor porque cuando una es soltera

no me hacía falta nada, vivía bien. Tenía para todo, en cambio ahora no puedo darles muchas cosas a mis hijos, el marido es más peso en la casa” (Martha, noviembre 2004).

No obstante, no todas son igualmente pobres. Los hogares más pobres son aquellos que no están cohesionados o hacen su vida en las calles: “Hay distintas clases de pobres, porque hay familias que pasan en la calle durmiendo, pidiendo caridad, otros pasan tomando, hay niños que no tienen padres de familia que les den un pedazo de pan y se mueren del hambre, piden limosna” (Verónica, noviembre 2004). En otras dimensiones de la pobreza, las mujeres resaltan factores como la salud y las redes sociales y la vivienda: “Mi situación parece que está mejor (...) lo bueno es que tenemos salud, tengo problemas de repente con mis hijos, a veces ellos toman y eso no me gusta, ahora los hijos jóvenes no obedecen a sus papás, hacen lo que ellos quieren...” (María, noviembre 2004). Por otro lado, “los que tenemos una casita donde meter la cabeza somos menos pobres” (Consuelo, noviembre 2004).

Se reconocen además los vínculos intergeneracionales para el sostenimiento familiar basados en el patriarcado, que son bastante comunes en Latinoamérica: “Desde que mi papi falleció la situación está peor, cuando vivía mi papi nunca nos moríamos del hambre, no teníamos mucho, pero teníamos” (María Luisa, noviembre 2004). De hecho, la pobreza tiene, de acuerdo a estas percepciones, alta relación con el hecho de “ser vieja y no tener hijos, o que los hijos ya no estén en el hogar”.

Fuente: resumen de entrevistas realizadas en las zonas periféricas de Quito, en Prieto et al (2005).

1.6 DESIGUALDAD VERTICAL (DE INGRESOS) Y HORIZONTAL (BRECHAS DE GÉNERO)

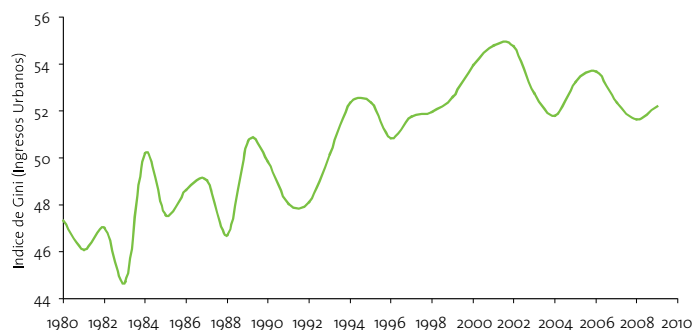
En este acápite se introduce el análisis de la evolución de la desigualdad de ingresos en la región latinoamericana y su relación con fenómenos estructurales de la desigualdad horizontal de género, que se da principalmente a través de las desigualdades que enfrentan las mujeres en su trabajo, dentro del mercado laboral y en el ámbito doméstico.

La evolución de la desigualdad en la región en los últimos 20 años muestra una tendencia creciente en la década de los 90, que se revierte durante los años 2000 marcando, para algunas visiones optimistas, un punto de inflexión de la tendencia general de la desigualdad, persistente y creciente que ha tenido lugar históricamente en la región. Se justifica esta visión pensando en la concurrencia de los factores estructurales como la reducción de la fecundidad, el incremento de la educación, la estabilización de las economías; y factores más inmediatos como incrementos en los niveles de empleo, cambios en los precios relativos de los bienes primarios, los programas focalizados, una política fiscal favorable, entre otros.

No obstante, en comparación con otras regiones, el coeficiente de Gini⁴⁸ muestra que todavía la región es la más desigual del mundo y no se puede afirmar una reversión del comportamiento observado durante más de 30 años. Así, la visión menos optimista sostiene que la desigualdad es un fenómeno que tiende a permanecer sin presentar variaciones significativas en el tiempo y la tendencia general histórica sigue siendo alta. Lo que sí parece haber ocurrido es que se superaron las secuelas de las crisis de los 90 pero, al igual que en períodos recientes, nuevas crisis pueden impactar en este indicador (ver gráfico 1.8).

⁴⁸ El Coeficiente de Gini mide la distribución de ingresos, al relacionar esta variable ordenada acumulativamente de menor a mayor (en el eje vertical) y la proporción de la población a la que corresponden las sucesivas proporciones del ingreso (en el eje horizontal). En completa igualdad, a todos los individuos les corresponde igual proporción del ingreso, con lo cual la relación entre ambas variables es la diagonal desde el origen, entre ambos ejes. El Gini mide la distancia entre esta recta y la relación observada en la realidad, con valores entre 0 (igualdad) y 1 (completa desigualdad). Este coeficiente también se puede utilizar para medir la distribución de otras variables como la riqueza o la carga de trabajo.

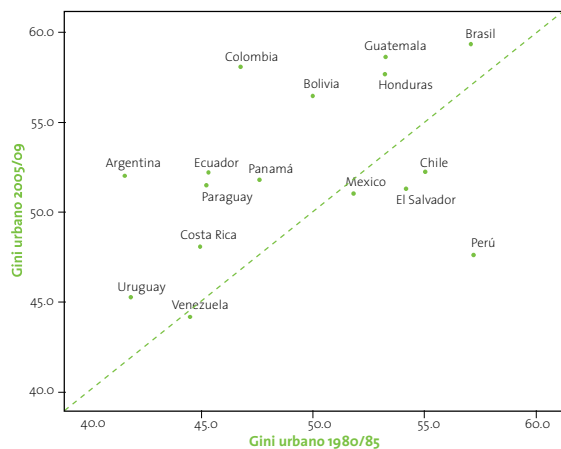
Gráfico 1.8. América Latina: desigualdad de ingresos 1980-2009



Fuente: World Income Inequality Database (WIID), CEPAL Panorama Social de América Latina, varios años.
Elaboración propia.

Como se muestra en el diagrama 1.5, la mayoría de los países de la región son más desiguales hoy que en los años 80, con excepción de Chile, El Salvador, Perú y Venezuela, que exhiben tasas medias de desigualdad (relativas a la región latinoamericana). Por otro lado, Brasil sigue manteniendo sus tasas altas (aunque con reducciones importantes durante los últimos 5 años) y Colombia pasa de tener una desigualdad menor a la media en los 80 a una de las mayores entre 2005 y 2009, al igual que Honduras y Guatemala.

Diagrama 1.5. América Latina: desigualdad comparada entre 1980-1984 y 2005-2009



Fuente: CEPALSTAT, varios años. Elaboración propia.

El incremento de la desigualdad está relacionado con los períodos más fuertes de reforma estructural y las respuestas ortodoxas a las crisis de alrededor de finales de los 90. No obstante, no se puede decir que la desigualdad y el crecimiento mantengan una relación inversa unívoca y no ambigua; de hecho durante períodos de alto crecimiento económico la desigualdad no responde con una reducción, a menos que se den mecanismos redistributivos o que se haya tratado de un crecimiento orientado por demanda.

En oposición con una situación económica estable y saludable, Chile, Argentina y México se han caracterizado por tener niveles altos de desigualdad hasta antes de los 2000, año a partir del cual se inicia un decrecimiento del coeficiente de Gini, llegando a reducirse en 4 puntos en 6 años. Por otro lado, se aprecia un grupo de países de desigualdad media, con cambios menos drásticos hacia los últimos años, que combinan tasas de crecimiento importantes durante los últimos años de los 2000 pero elevaciones en la desigualdad: Ecuador, Costa Rica, Panamá y Paraguay. En el caso de Bolivia, el Gini no cambia durante los 90 pero se eleva al final de esa década hasta 2003, año a partir del cual se ha mantenido más o menos igual.

En general la desigualdad general de ingresos de la región es más “homogénea” hoy que hace 30 años. Es decir, los países de la región tienden a ser más “igualmente desiguales”. En los países con menor desigualdad a inicios de los años 80 ésta crece más que en aquellos con una desigualdad inicial más alta.

No obstante, durante los años de crecimiento reciente, esta situación parece revertirse. En promedio, la región reduce cerca de un punto y medio el índice Gini entre la segunda mitad de los 90 y 2009. No obstante, se aprecia con claridad el impacto de las diversas crisis entre el final de la década de los 90 y los primeros años de los 2000 al elevarse el indicador durante estos años y luego descender hacia 2008. Brasil es el país que más reducciones en la desigualdad presenta, seguido por Perú y Venezuela. De los países de mayor desigualdad en los años 90, Bolivia no consigue revertir aún esta situación, aunque reduce un poco el índice entre 2000 y 2009. Actualmente Venezuela, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Perú presentan menores niveles de desigualdad, mientras que Bolivia, Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala presentan los más altos.

De acuerdo a Lustig (2009), el decrecimiento reciente de la desigualdad ha acompañado cambios en el mercado laboral en los que se ha reducido la brecha entre los ingresos de trabajadores calificados y poco calificados, así como la permanencia y aumento de transferencias dirigidas específicamente a los pobres⁴⁹. También se argumenta que la tendencia reciente hacia reducciones del coeficiente de gini tiene que ver con una intensificación de políticas fiscales contracíclicas, reformas fiscales en algunos países y en otros, el retorno a la regulación laboral y de seguridad social.

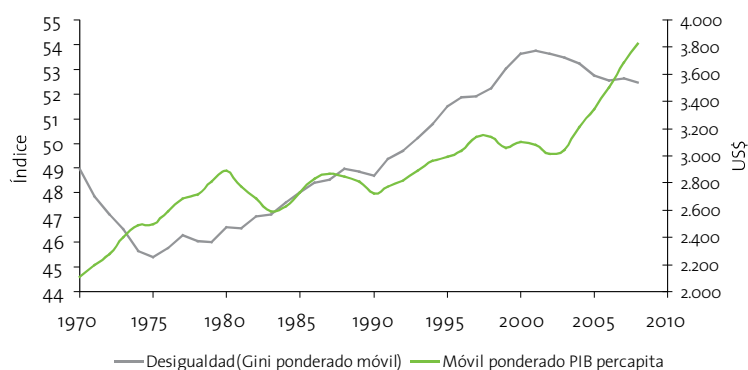
No obstante, al continuar siendo la región latinoamericana una de las más desiguales del mundo, enfrenta aún la necesidad de llevar adelante reformas profundas orientadas hacia la demanda y la equidad, en especial vía mercado laboral, ya que éste es la principal fuente de ingreso de la población en la región. Esta desigualdad salarial es explicada en gran medida por la no participación en el mercado laboral de una gran proporción de personas en edad y disposición de trabajar, pero que no están en el mercado por razones distintas a las de su propia capacidad para el trabajo. En este grupo hay una mayoritaria presencia de mujeres: el promedio de participación laboral de las mujeres latinoamericanas es de 53% frente a 80% de los hombres, al año 2010. No obstante, si bien la brecha en participación laboral (que está relacionada con la posibilidad de generación de ingresos) constituye una fuente importante de desigualdad de género y global, las brechas salariales refuerzan las desigualdades de salario y presionan el salario medio hacia abajo en especial en las actividades menos calificadas y regímenes menos regulados, con lo cual estas desigualdades pueden ahondarse.

La existencia de estas brechas puede constituirse en una fuente de ahorro para la economía, especialmente en regímenes orientados por ganancia; o en un factor de desaceleración en regímenes orientados por demanda. En el caso de América Latina, se aprecia una tendencia secular similar entre las desigualdades de ingreso y el crecimiento; no obstante, en el gráfico 9 se puede observar que la desigualdad crece menos rápi-

⁴⁹ Complementando la hipótesis de que la reducción en la desigualdad aporta a la reducción de la pobreza (en conjunto con el crecimiento económico), se podría también indicar que la reducción de la pobreza extrema reduce la desigualdad, dado que reduce la desigualdad “entre pobres”. De hecho, la pobreza ha mostrado ser mucho más susceptible a cambios en el tiempo que la desigualdad, cuya permanencia se debe a factores de estructura que son difíciles de medir y comparar entre las diferentes naciones.

do y durante los años 2000 se aprecian movimientos opuestos, en línea con lo que se ha denominado “crecimiento pro pobre”⁵⁰, que se verifica en muchos de los países de la región durante los últimos años (Ponce, 2010).

Gráfico 1.9. América Latina: desigualdad y PIB



Fuente: World Income Inequality Database (WIID); CEPAL, anuarios estadísticos varios años. Elaboración propia.

Uno de los vínculos más visibles entre la desigualdad vertical y horizontal⁵¹ (en este caso, entre hombres y mujeres) tiene que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo y el empleo. Como consecuencia de las crisis económicas de los años iniciales de la década de 2000, la mayoría de países de la región experimentó elevaciones en el desempleo. Estas alcanzan su máximo en el período 2002-2003, más alto que durante la mayor elevación de mediados de los 80. Igualmente en concordancia con la recuperación económica el desempleo se reduce hacia el final de la década. Las proyecciones permiten observar un ligero incremento durante 2009 (sin llegar a las tasas de las crisis o a las más elevadas de la década de los 80).

De acuerdo a autoras de la economía feminista, el juego de oferta y demanda de trabajo, es decir, el “mercado”, es resultado de un sistema de conflictos. Así, la distribución entre salario y ganancia está basada en las tensiones entre las condiciones de vida. La oferta laboral es fruto de un proceso de producción organizado a partir de la división sexual del trabajo; la demanda, por su lado, es parte del sistema económico de mer-

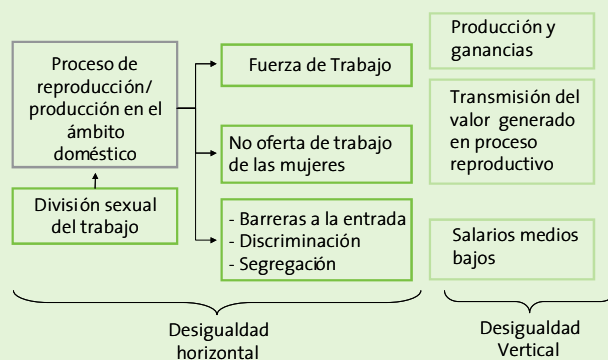
⁵⁰ Ver debate sobre la relación entre desigualdad y crecimiento en el glosario.

⁵¹ Ver glosario.

cado. Esto tiene dos implicaciones: el salario resulta no ser el reflejo de la productividad del trabajo; y el desempleo (y subempleo) no reflejan sobreoferta de trabajo no productivo sino la separación entre proceso de producción de mercancías y el de reproducción de la población (ver recuadro 1.4).

Recuadro 1.4
Reproducción de la desigualdad en la relación reproducción-mercado

Las desigualdades horizontales provenientes del sistema de género provocan transmisión de valor entre trabajo y el sistema de acumulación vía formación de fuerza de trabajo barata, brechas salariales y ahorro del sistema. Esto a su vez refleja desigualdad vertical, de ingresos y factorial.

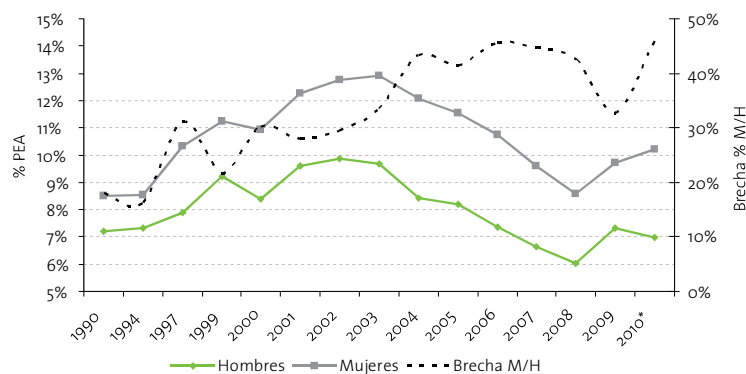


Fuente: Adaptación de Vásconez (2010).

Así, la región latinoamericana refleja algunos de estos fenómenos en su historia reciente: brechas de desempleo, diferencias salariales de género con alto componente de discriminación y persistencia de población femenina carente de independencia económica. En el caso del desempleo, aun cuando se observa una tendencia general hacia la reducción de este indicador a partir de los primeros años de los 2000, la brecha entre mujeres y hombres en general se mantiene e incluso se eleva durante los últimos años, con excepción de 2009 en que el desempleo de los hombres se elevó más debido a la naturaleza de la recesión de ese año⁵². La evolución del desempleo al igual que la brecha entre mujeres y hombres se presenta en el gráfico 1.10.

⁵² Un análisis detallado de las implicaciones de género de la reciente crisis se encuentra en el capítulo 6 de esta publicación.

Gráfico 1.10. América Latina: desempleo



(*) Primer trimestre
Fuente: CEPAL; Panorama Laboral OIT, 2010. Elaboración propia.

Por otro lado, un elemento estructural de la región es la persistencia histórica del subempleo generado, en parte, por la falta de empalme entre los requerimientos de calificación de los sectores más dinámicos y la necesidad de competir, que es resuelta a través de estrategias de subdivisión de contratos, con el fin de reducir los costos de protección y otros derechos laborales. El ajuste por jornada también es una estrategia anti recesiva tomada por las empresas, antes que la revisión de niveles salariales o reducción expresa de personal, que resultan medidas más drásticas y políticamente conflictivas.

Por otro lado, un elemento estructural de la región es la persistencia histórica del subempleo generado, en parte, por la falta de empalme entre los requerimientos de calificación de los sectores más dinámicos y la necesidad de competir, que es resuelta a través de estrategias de subdivisión de contratos, con el fin de reducir los costos de protección y otros derechos laborales. El ajuste por jornada también es una estrategia anti recesiva tomada por las empresas, antes que la revisión de niveles salariales o reducción expresa de personal, que resultan medidas más drásticas y políticamente conflictivas⁵³.

En este contexto, de acuerdo a la OIT, la tasa de subempleados y subempleadas por insuficiencia de horas se duplica durante los años

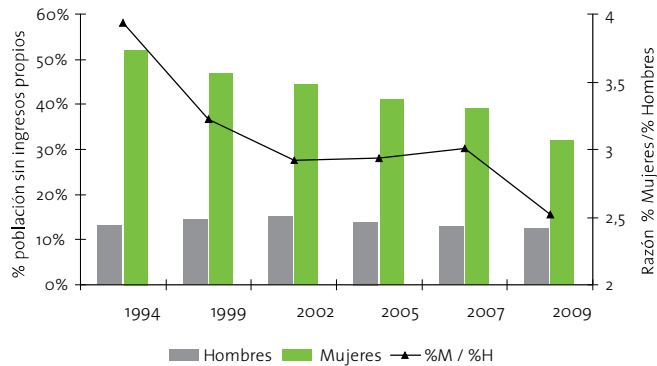
⁵³ Boletín CEPAL-OIT, septiembre 2009.

90 en Argentina, Brasil, Chile y México. En el caso de Bolivia, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Perú, datos desde 1994 a 2000 muestran incrementos de entre 2 y 4 puntos, mientras que en Uruguay, Panamá y Costa Rica la elevación es más leve. Por otro lado, a partir de las crisis de finales de los 90, en la mayoría de países de la subregión el subempleo se eleva entre el 20 y 50% frente a los primeros años de esta década. A partir de esta época, el subempleo se instala como modalidad de trabajo mayoritaria en casi todos los países de la región. Hacia finales de la década, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala y México exhiben las tasas de subempleo más altas de la región. No obstante, todos los países, salvo Chile, reducen un poco estas tasas, que vuelven a elevarse en casi todos los países hacia 2009 (primer semestre), en especial en Colombia, Ecuador, Chile y Perú. En el resto de la región se mantienen igual o se reducen ligeramente (el caso de Brasil). El subempleo por horas (trabajar menos horas que las disponibles) prevalece en el 40% de la población masculina trabajadora, y en el 55% de la población femenina; en tanto que el subempleo por salario (recibir salario menor al legal) es casi exclusividad de las trabajadoras, independientemente del sector (formal o informal) en el que se encuentran. Esto hace suponer que la carencia de ingresos (vía no participación) y el subempleo son la principal causa de la desigualdad de ingresos laborales entre hombres y mujeres, una gran parte de la cual se debe a factores de discriminación y segregación laboral⁵⁴.

Cabe señalar, no obstante, que la brecha de género en la población sin ingresos se ha reducido sustancialmente entre 1994 y 2009 en parte por la participación laboral de las mujeres, pero también como fruto de cierta diversificación de ingresos provenientes de remesas o transferencias gubernamentales en especial en la población más pobre. En 1994 la relación entre hombres y mujeres sin ingresos era de 4 a 1; en 2009 se reduce a más de la mitad. Como muestra el gráfico 1.11, la proporción de población masculina sin ingresos no ha cambiado durante este período.

⁵⁴ Una gran cantidad de bibliografía se ha escrito en la región sobre temas de discriminación y segregación laboral. Para una discusión teórica ver Abelda (2009), y un recuento de varios estudios ver Nopo (2008, 2010); para el caso de América Latina ver Esquivel (2007), Amarante y Espino (2004), Berger y Todaro (2003).

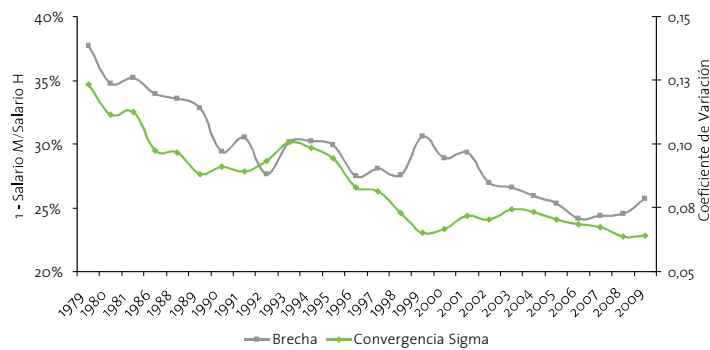
Gráfico 1.11. América Latina: hombres y mujeres sin ingresos propios



Fuente: CEPALSTAT, seguimiento a metas del milenio, 2009. Elaboración propia.

Igualmente, la brecha salarial, considerando la población con educación superior, también tiende a descender y a converger a partir de 1990, mostrando una mejora en el retorno a la educación de las mujeres además de posibles mejoras en la situación de discriminación, que se deberían analizar con mayor profundidad para cada país.

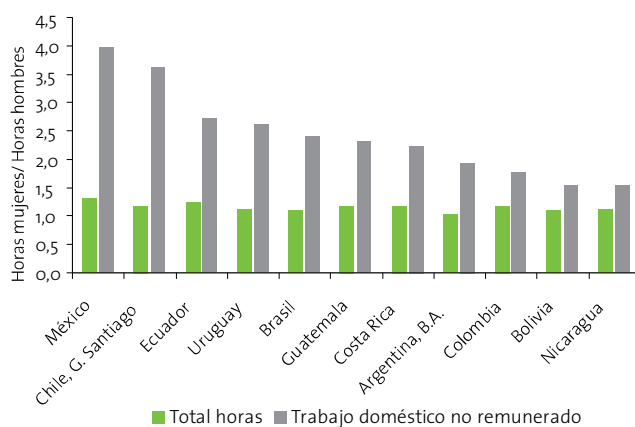
Gráfico 1.12. América Latina: brecha salarial de género para población con más de 13 años de escolaridad



Fuente: Compendio Estadístico CEPAL, 50 años, 1950-2008; CEPALSTAT 2009. Elaboración propia.

Uno de los principales elementos estructurales de la relación entre la desigualdad general y la desigualdad de género hace referencia a la visión sesgada de la economía frente a la economía del cuidado. Así, se ha denominado “crisis de los cuidados” a la limitada y decreciente oferta de trabajo doméstico no remunerado que sostiene los hogares en muchos países, debido ante todo a que la dependencia se eleva y las mujeres (proveedoras históricas de cuidados) tienen menos tiempo para este trabajo. Esto, en el marco de la “macro” crisis hace ver que aunque el sostenimiento de la vida no ha sido la finalidad del sistema económico, de todas formas se ha dado a través del trabajo de una proporción básica de la población que lo ha tenido bajo su responsabilidad, siendo esto aceptado como natural. Si bien no existe información histórica para los países de Latinoamérica, se puede apreciar que en la mayoría de los países que han realizado análisis de uso del tiempo se presentan desigualdades muy elevadas en la carga de trabajo doméstico no remunerado de cuidados, de entre 1,5 y 4 veces (gráfico 1.13).

Gráfico 1.13. América Latina: relación de dedicación al trabajo para hombres y mujeres entre 2002 y 2007



Fuente: CEPAL, Observatorio de la Igualdad de Género, CEPAL. Elaboración propia.

El gráfico anterior permite observar también que no existe una sustitución (*trade-off*) entre el tiempo de trabajo mercantil y doméstico no remunerado, con lo cual incrementos en el trabajo mercantil de las mujeres deteriora su situación personal de bienestar. Por otro lado, en términos macro, cálculos iniciales del valor monetario equivalente

del trabajo de cuidados para México y Ecuador permiten inferir que la redistribución necesaria de recursos hacia la economía del cuidado sería del orden del 30% del ingreso nacional (Vásconez, 2009; Gomez Luna, 2010)⁵⁵.

Las desigualdades en el cuidado no solamente muestran las relaciones de género sino también inequidades dentro de las sociedades latinoamericanas. Un indicador indirecto de esta situación es la todavía elevada incidencia de hogares de más de 5 miembros en los hogares más pobres. Por otro lado, si bien no se puede hacer una relación histórica en la región entre la intensificación del trabajo doméstico no remunerado de cuidados y la pobreza, algunos estudios muestran que situaciones de vulnerabilidad laboral e inestabilidad de ingresos o falta de acceso a servicios conllevan a una mayor carga de trabajo en general, y doméstico en particular (Esquivel, 2006). Igualmente, es directa la relación entre la no participación en el mercado laboral (inactividad) y la pobreza del hogar y de las mujeres particularmente. De hecho, esta relación es bidireccional; es decir, por un lado, la condición de pobreza es un factor que incide en la oferta laboral, dado que las mujeres pobres tienden a tener peores condiciones de calificación, enfrentan mayores costos de búsqueda, mayor número de hijos e hijas pequeños sin acceso a servicios de cuidado que se constituyen en barreras para la entrada al mercado; y por otro lado, la no participación en el mercado de trabajo incide en la pobreza de las mujeres y sus familias, dado que implica una imposibilidad de generar recursos. Esto muestra un círculo entre la vulnerabilidad y pobreza de ingresos y la carga de trabajo, es decir, la pobreza de tiempo, y la desigualdad global.

⁵⁵ El cálculo de indicadores ampliados de bienestar que incluyen el tiempo como dimensión del bienestar, podría permitir tener una idea más clara de las desigualdades estructurales basadas en tiempo y los flujos de valor que se transmiten hacia el capital a partir del trabajo de cuidados. Existen algunas metodologías interesantes, como las mediciones de líneas de pobreza de tiempo, déficit de tiempo, valoraciones de la producción del hogar, entre otros, que están siendo utilizadas para mediciones en el caso de países como Argentina, Uruguay, México y Chile. La vinculación de estas mediciones con los flujos del circuito económico es una tarea pendiente de discusión y análisis.

1.7 SÍNTESIS DE DIMENSIONES DE SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y UBICACIÓN DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

A continuación se presenta, a manera de síntesis, un resumen de las principales variables analizadas en este capítulo, a través de un análisis factorial de componentes. El análisis factorial permite analizar las variables que están relacionadas entre sí para explicar un determinado fenómeno. Este método analiza las distancias entre los vectores correspondientes a las variables mencionadas, presentándolas en forma gráfica en un espacio de dos o más dimensiones. El método permite agrupar variables que se encuentran correlacionadas entre sí, en subconjuntos de características dentro de los cuales luego se ubican los países analizados. Las variables que se utilizaron para este proceso de cálculo fueron:

Variables laborales de hombres y mujeres

- Participación laboral de las mujeres entre 2005 y 2009
- Informalidad de hombres 2009
- Informalidad de mujeres 2009
- Desempleo de hombres y mujeres 2009
- Brecha salarial de género a 2009
- Brecha de género en la participación laboral, 2009

Variables de situación social y de género

- Pobreza (ingresos) 2009
- Coeficiente de Gini 2009
- Porcentaje de hogares con más de 5 miembros, 2009
- Porcentaje de mujeres y hombres sin ingresos a 2009
- Índice de desarrollo humano, 2009
- Índice de feminidad de la pobreza, 2009
- Porcentaje de mujeres aportantes de ingresos en el hogar a 2008 (último dato)

VARIABLES MACRO

- Porcentaje de gasto social en el total del gasto público, 2009
- Apertura económica, 2009
- PIB per cápita, 2009

El método empleado permitió realizar 4 agrupaciones, sobre la base de dos ejes de análisis: un eje de crecimiento/pobreza, y otro de empleo:

Diagrama 1.6. América Latina: ubicación de países de acuerdo a las dimensiones del análisis de componentes

		Pobreza/bajo crecimiento →	
Mejores Condiciones de empleo ↓	Grupo 1	Grupo 2	
	Desempleo de hombres y mujeres Alta Brecha salarial de género Importante gasto social y gasto público en general	Participación laboral creciente de las mujeres Incidencia alta de mujeres sin ingresos Informalidad de hombres y mujeres Pobreza	
	Grupo 3	Grupo 4	
	Alto índice de Desarrollo humano Alto PIB per cápita Feminidad de la pobreza	Alta proporción de hogares con más de 5 miembros Hombres que no perciben ingresos Apertura Económica Brecha de género en participación laboral	

Fuente: Elaboración propia.

Grupo 1

En este grupo se ubican países con relativamente mejor situación en cuanto a sus indicadores generales de situación: alto PIB per cápita, alto gasto público, pero también presentan elevados niveles de desempleo y mayores brechas salariales de género. Son países con alta participación de las mujeres en el mercado laboral, pero esta participación no asegura una mejor situación individual. Aquí se ubican Uruguay y Brasil. En Uruguay, la recuperación económica a partir del segundo trimestre de 2003 trajo un crecimiento sostenido en el que la participación laboral femenina continuó su crecimiento histórico a mayor velocidad que la masculina (Espino, 2010), con lo cual las brechas de participación se cerraron pero la brecha de desempleo se mantuvo y amplió. Para el caso de Brasil, en el período reciente de bonanza económica hay incrementos de la participación laboral de las mujeres aunque se mantienen los sesgos de selección, con lo cual se elevan las brechas de salario y se reduce el

desempleo, mostrando mejores oportunidades de entrada y empleabilidad, pero no en empleos a tiempo completo (Vásconez, 2010).

Grupo 2

Este segundo grupo refleja condiciones de alta vulnerabilidad en cuanto a variables de situación como pobreza y desigualdad pero también alta informalidad e incidencia de población femenina sin ingresos, y bajo crecimiento. En este grupo también se encuentran países con creciente participación laboral de las mujeres y un porcentaje importante de mujeres aportantes al ingreso del hogar, que pueden asociarse con hogares con jefatura femenina. En este grupo de países se ubican Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia y El Salvador. Los primeros dos países han llevado adelante reformas económicas orientadas hacia el mercado y no exhiben cambios profundos en sus regímenes de bienestar frente al modelo implementado durante los años 90. En los otros tres casos se puede observar que son economías de bajo crecimiento histórico y pobreza crónica, de instituciones relativamente débiles y pocos cambios estructurales. Salvo el caso de Bolivia, esta situación no se ha revertido durante los últimos años.

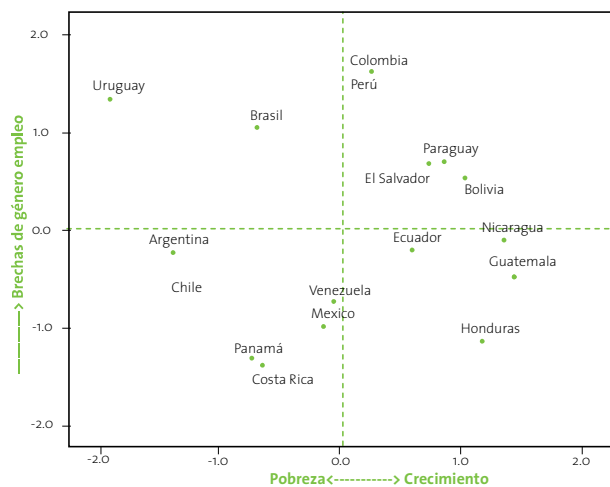
Grupo 3

En el grupo 3 se ubican países en mejores condiciones respecto a la pobreza general, con un mayor nivel de producto per cápita y un mayor índice de desarrollo humano. No obstante, estos casos también están asociados con una elevada tasa de feminidad de la pobreza; es decir, como se mencionó antes, son países en los que las estrategias de reducción de pobreza pueden haber estado sustentadas en elevación de las desigualdades dentro de los hogares, o entre hogares pobres. En este grupo se ubican Argentina y Chile. En este mismo grupo, con menores tasas de crecimiento pero relativamente mejores condiciones de empleo, menor informalidad y menos población sin ingresos se ubica Costa Rica y Panamá. Se puede identificar entonces dos perfiles de regímenes: el primero que ha puesto énfasis en estrategias pro crecimiento económico y políticas que tienden a reducir la pobreza vía ingresos. El segundo, que ha enfatizado en políticas de apoyo al empleo aunque con posibles mayores impactos en el empleo masculino.

Grupo 4

El último grupo contiene variables que suponen mejores condiciones de empleo aunque la participación laboral de las mujeres es menor, hay alta incidencia de pobreza y gran cantidad de hogares con más de 5 miembros; en este grupo también se encuentra una mayor proporción de hombres sin ingresos y se ubica una variable macro: la apertura económica, que de acuerdo a este análisis, tendría mayor relación con la pobreza que con el crecimiento económico. Con relativamente menores niveles de informalidad y alta incidencia de la aportación económica femenina y monoparentalidad se ubican en este grupo Ecuador, Guatemala y Honduras; en igual lógica pero menores niveles de pobreza se encuentran Venezuela y México.

Diagrama 1.7. Ubicación de los países de América Latina de acuerdo a la agrupación de variables de situación laboral, pobreza y crecimiento



Fuente: Bases de datos por país construidas para el estudio. Elaboración propia.

1.8 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

En un marco de desigualdad de más de tres décadas en la región latinoamericana y los países de estudio, los últimos 4 años presentan una mejora tanto en la distribución del ingreso en general como en el crecimiento económico y las condiciones de empleo. Estos indicadores cambian en 2009 dados los efectos de la reciente crisis financiera, aunque se proyectan mejoras hacia 2010. En este marco, las desigualdades de género expresadas en las brechas de participación se han reducido mostrando un crecimiento de la feminización laboral más que la oferta masculina. Por su lado, las brechas de desempleo y salario no se han modificado, e inclusive algunas de ellas se agravaron en las crisis de la década y no se han recuperado totalmente. Igualmente, a la par con cambios importantes en las estructuras demográficas, persisten diferencias importantes entre países y dentro de ellos, con lo cual en muchas regiones en especial centroamericanas y de la región andina las estructuras familiares extensas generan presión sobre el trabajo doméstico de cuidados que, para toda la región en general, continúa a cargo casi exclusivamente de las mujeres.

En un contexto de transiciones y cambios en regímenes económicos y de bienestar, en unos países con mayor profundidad que en otros, se presentan modelos de políticas económicas que en general tienden a incrementar la presencia estatal en las economías en especial en la política fiscal (en algunos casos a través de reformas tributarias y en la mayoría de ellos elevaciones sostenidas del gasto), con lo cual se ha podido mantener niveles de pobreza menores que para décadas anteriores. No se consigue a través de estas políticas revertir la tendencia de la desigualdad vertical, aunque se supera la situación de finales de los años 90 en casi todas las economías. Por el lado de las inequidades de género, las tendencias generales muestran pocos cambios en las estructuras laborales y del trabajo doméstico no remunerado, y pocos esfuerzos de reformas estructurales que permitan romper estas inercias. No obstante, se observa una tendencia hacia la reducción de las brechas de ingresos laborales, menor cantidad de población femenina sin ingresos y mayor participación laboral, pero en condiciones estructurales de subempleo. También se observa una tendencia hacia el “retaceo” de las economías y las unidades económicas, ante la multiplicación de unidades micro e individuales (autoempleo) cuyas condiciones laborales son inciertas e inestables, y con una amplia

participación de mujeres. Las estructuras de la economía en términos sectoriales no cambian sustancialmente, sin embargo acompañan al retaceo económico a través de la aceleración del PIB comercial y de servicios, y con estructuras rígidas de desarrollo de la manufactura y reducción de la importancia de la agricultura en el producto. No se aprecian cambios en términos de políticas orientadas hacia la diversificación productiva, aunque recientes propuestas sobre nuevos modelos económicos en algunos países proponen el fomento de las economías pequeñas en el marco de la soberanía alimentaria y el autosostenimiento, con lo cual se esperaría que se incremente el apoyo a estas economías y a sus principales actoras, que son las mujeres. Un resultado positivo en términos del bienestar de las mujeres depende de que se superen las limitaciones del enfoque de la “microempresarización” que tuvo consecuencias negativas en términos de exclusión, pauperización y sobrecarga de trabajo en las mujeres en la mayoría de los países.

Al respecto se observa también que la participación laboral femenina tiene igual tendencia que el crecimiento económico, pero sus fluctuaciones son contracíclicas al igual que su tasa de crecimiento. Es decir, la participación de las mujeres en el mercado laboral es positiva para el crecimiento económico (por varias causas, ya explicadas); no obstante, puede ocurrir que en recesión, la expulsión de cierta mano de obra femenina se corresponda con mayor intensidad de trabajo doméstico con lo cual se puede conseguir que la economía se recupere vía ahorro de los hogares.

Por otro lado, el incremento de las horas trabajadas (intensidad del trabajo) no tiene una relación positiva con el crecimiento, indicando un posible impacto negativo de la reducción de tiempo dedicado a los cuidados sin que haya sustitución por servicios públicos, privados o corresponsabilidad de otros miembros del hogar. Un análisis sobre el trabajo doméstico y el ahorro de los hogares frente a la oferta laboral femenina es necesario para verificar esta intuición. Si bien alguna literatura y evidencia fuera de la región muestran un proceso de defeminización en etapas más avanzadas del crecimiento orientado a exportaciones (en estas etapas se supone que las exportaciones cambian su naturaleza, se les añade valor agregado, se insertan en formas de competencia menos relacionadas con el precio, lo cual requiere mayores destrezas y calificación o capacitación para lo cual el empleo

masculino es preferido), la evidencia para Latinoamérica relacionada con el modelo orientado hacia exportaciones es que muchas de sus economías han reprimarizado sus economías durante los años 90, y con ellas la entrada de las mujeres es clave.

En este contexto, podemos describir la relación entre la lógica de género y la lógica económica a partir de este análisis de la situación latinoamericana en términos de inequidad de género que se añade a la inequidad persistente en la región. Esta lógica se ha basado en un estado que reduce su inversión en sistemas de protección y cuidado en situaciones de recesión (situación que se revierte en los últimos años y en el último episodio recesivo); un mercado laboral que paga menos, expulsa trabajadores y trabajadoras, genera situaciones de vulnerabilidad ante un potencial desempleo que hace que las personas estén más en el mercado de trabajo buscando o tratando de emplearse en cualquier actividad, dejando menos tiempo para el cuidado o sustituyéndolo con trabajo de otros miembros del hogar (sin una alternativa de provisión social de estos servicios); un sistema económico que ha buscado mayor competitividad externa, a través de subsidiar exportaciones; un mercado de trabajo que discrimina y segrega y un sistema económico que hace uso de las brechas salariales y el trabajo doméstico para su estabilización.

BIBLIOGRAFÍA

Abelda, R, Drago, R. (2009), *Un level playing fields, understanding wage inequality y discrimination*. Tercera Edición, Economic Affairs Bureau, Cambridge.

Altimir, O. (2008), "Distribución del ingreso e incidencia de la pobreza a lo largo del ajuste", *Revista de la CEPAL*, no.96.

Amarante, V. y Espino, A. (2004), "La segregación ocupacional de género y las diferencias en las remuneraciones de los asalariados privados. Uruguay, 1990-2000", *Desarrollo Económico*, no.173, vol.44, abril-junio, Buenos Aires.

Barba, C. (2005), "Paradigmas y regímenes de bienestar", *Cuadernos de Ciencias Sociales*. San José.

Bhaduri, A. (2007), "On the dynamics of profit-led and wage-led growth", *Cambridge Journal of Economics*, no. 32.

Berger, S. y Szretter, H. (2002), "Costos laborales de hombres y mujeres. El caso de Argentina", en Abramo, L. y Todaro, R. (eds.), *Cuestionando un mito: costos laborales de hombres y mujeres en América Latina*. OIT, Lima.

Blecker, y Seguino (2002), "Macroeconomic Effects of Reducing Gender Wage Inequality in an Export-Oriented Semi Industrialized Economy", *Review of Development Economics*, no.6 (1).

Berik, G. der Meulen, Rodgers (2008), "Engendering Development Strategies y Macroeconomic Policies: What's Sound y Sensible?", en Günseli Berik et al eds. *Social Justice y Gender*. Routledge.

Berry, A (2008), *The impact of globalization and information technology on Latin America, Globalization, Growth, and Marginalization*. The Macmillan Press, Londres.

Blau, Francine (2006), *Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women: 1980-2000*. Cornell University, NBER, CESifo and IZA Bonn, Discussion Paper no. 2180.

Braunstein, E. (2008) "The Feminist Political Economy of the Rent-Seeking Society: An Investigation of Gender Inequality y Economic Growth", *Journal of Economic issues*, no. 42, vol. 4, pp:959-79.

Çağatay, N, Elson, D y Grown C. (1995), "Introduction, Special Issue on Gender, Adjustment y Macroeconomics", *World Development*, no.23, vol.11, pp:1827-1836.

Carrasco, C. (2001), "La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?", en revista *Mientras Tanto*, no. 82, otoño-invierno 2001, Icaria Editorial, Barcelona.

CEPAL, *Panorama Social*, varios años.

_____ (2009), *Balance Preliminar de las Economías Latinoamericanas*. Chile.

_____ *Estudio económico de América latina*. varios años.

_____ OIT (2008, 2009), *Boletín CEPAL / OIT*.

Darity, W. (1995), "The Formal Structure of a Gender-Segregated Low-Income Economy", *World Development*, no.23, vol.11.

Deere, C., Leon M. (2001), *Empowering women: Land and property rights in Latin America*. University of Pittsburgh Press, USA.

Ertürk, K. y Çağatay, N. (1995), "Macroeconomic Consequences of Cyclical y Secular Changes in Feminization: An Experiment at Gendered Macromodeling", en *World Development*, no.23.

_____ y Darity, W. (2000), "Secular Changes in the Gender Composition of Employment y Growth Dynamics in the North y the South", *World Development*, no.28.

Espino, Sanchis (2005), *¿A qué modelo de desarrollo apostamos las feministas?*. Iniciativa Feminista de Cartagena - Red Internacional de Género y Comercio, capítulo Latinoamericano.

Esquivel (2007), "Género y diferenciales de salarios en la Argentina", en Novick y Palomino (coordinadores), *Estructura productiva y empleo. Un enfoque transversal*. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires.

_____ (2006), *What else do we have to cope with? Gender, paid and unpaid work during Argentina's last crisis*. GEM-IWG Working Paper 06-6.

Esteve-Volart, B. (2004), *Gender Discrimination y Growth: Theory y Evidence from India*. Development Economics Papers 42, London School of Economics.

Falconí (2009), "Otra política económica, deseable y posible", en Falconí y Acosta, *Asedios a lo imposible, propuestas económicas en construcción*. FLACSO Serie Foro, 2005, Quito.

Ñopo, H, Calónico, S. (2008), *Gender Segregation in the Workplace y Wage Gaps: Evidence from Urban Mexico, 1994-2004*. Research Department Working Paper 636 IADB, Washington.

Gasparini, Cruces, et al (2008), *A turning point? Recent developments on inequality in Latin America y the Caribbean*. CEDLAS, Argentina.

Gomez, Luna (2010), *Cuenta satélite de los hogares: valoración del trabajo doméstico no pagado: el caso de México*. INEGI, DF.

Klasen, S. (2002), "Low Schooling for Girls, Slower Growth for All? Cross-Country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development", *World Bank Economic Review*, no.16, vol.3.

_____ y Lamanna, F. (2009), "The Impact of Gender Inequality in education y Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries", *Feminist Economics*, no.15, vol.3.

- Kucera (2002), *The Effects of Wealth and Gender Inequality On Economic Growth: A Survey of Recent Empirical Studies*. ILO working papers.
- Lustig, Nora (2009), "Pobreza, desigualdad y la nueva izquierda en América Latina", *Gobernabilidad democrática y la nueva izquierda*, no.6.
- Martinez Frazoni, J. (2007), *Regímenes de bienestar en América Latina*. Fundación Carolina, España.
- Ñopo, H. (2009), *The Gender Wage Gap in Peru 1986-2000: Evidence from a Matching Comparisons Approach*. Research Department Working Paper 675, IADB, USA.
- OIT (2010), "Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe" *OIT Boletín*, no.3.
(2008, 2009, 2010), *Panorama Laboral de América Latina y el Caribe*. OIT, Perú.
- Picchio, A. (1994), "El trabajo de reproducción, tema central en el análisis del mercado de trabajo", en Carrasco, C, Borderías (ed.), *Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales*. ICARIA, Madrid.
- Ponce, Juan (2010), *Desigualdad del ingreso en Ecuador: un análisis de los años 1990s y 2000s*. FLACSO Ecuador, cuadernos de Trabajo, Quito.
- Prieto, Mercedes (2005), *Mujeres, entre las crisis y las oportunidades*. FLACSO, Quito.
- Seguino, S. (2000), "Gender Inequality y Economic Growth: A Cross-Country Analysis", en *World Development*, no.28, vol.7.
- _____ (2005), *All Types of Inequality are Not Created Equal: Divergent Impacts of Inequality on Economic Growth*. The Levy Economics Institute's Working Paper Series, no.433.
- _____ y Grown, C. (2006), "Gender Equity y Globalization: Macroeconomic Policy for Developing Countries", *Journal of International Development*, no.18, vol.8, pp:1081-104.
- _____ y Setterfield, M. (2009), "Gender Equality y the Sustainability of Steady State Growth Paths", en Mark Setterfield (ed.), *Handbook of Alternative Theories of Economic Growth*. Edward Elgar Publishers, Ltd, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA.
- Thorp, R. (2009), *Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo XX*. Banco Interamericano de Desarrollo-Unión Europea; Washington DC.
- UNDP (2010), *World Development indicators*.
- Valenzuela M. (2005), "Desigualdad de género y pobreza en América Latina" en OIT, *Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo*. OIT, Chile.
- Vásconez, A. (2009), *El trabajo doméstico no remunerado en Ecuador: Una aproximación monetaria*. Documento de trabajo, Consejo Nacional de las Mujeres, Quito.
- _____ (2010), *Crecimiento y desigualdad multidimensional: el lugar del género en la discusión de una relación conflictiva en América Latina*. Serie Tesis, FLACSO, Quito.